

96ª REUNION — Conclusión de la 9ª SESION EXTRAORDINARIA — MARZO 17 DE 1966

Presidencia de los señores diputados Arturo Mor Roig y Guillermo A. Belgrano Rawson

Secretarios: doctores Eduardo T. Oliver y Guillermo González

Prosecretarios: doctor Enrique A. Pardo y señor Sebastián Oreste Cánepa

DIPUTADOS PRESENTES:

ABDULAJAD, Abraham
AGUINAGA, Carlos
ALEGRE, Carlos Duyol
ALETTA DE SYLVAS, Alfonso R.
ALFONSO, Raúl E.
ANTÓN, Luis
ANTÚN, Julio
ARANA, Tomás P.
ARBALLO, Enrique Jorge
ARIAS, Luis Osvaldo
ARMESTO, Alberto
ARRASCAETA, Félix de
ARROYO, Ramón F.
BACCAY, Rodolfo D.
BAFFICO, Alejandro O.
BALEBI, Isidro G.
BALESTRA (h.), Juan
BARRIONUEVO, Gerardo Eusebio
BELGRANO RAWSON, Guillermo A.
BELNICOFF, Manuel
BERRINI, Emilio
BIANCHI, Manuel Luis
BILBAO, Saturnino
BRAVO, Héctor F.
BUSACCA, Salvador F.
CACERES, Roberto M.
CAGGIANO, Angel R.
CALVÓ, Carlos Alberto
CASAS, David Jorge
CASTELLANOS, Ángel Ignacio
CASTILLO, Maximiano
CASTRO, Abel Andrés
CERDEIRO, Alfonso M.
CORAL, Juan Carlos
CORTELEZZI, Osvaldo
COTTONARO, Carlos Alberto Carmelo
CHRISTE, Jorge J.
DAMIANI, Salvador
DE CARA, José Eduardo
DEL MATTI, Juan José
DEL PERO, Miguel P.
DOMÍNGUEZ, Luis C.
FABRIZIO, Luis N.
FERNÁNDEZ, Raúl
FERNÁNDEZ NÚÑEZ, Isidro
FERREIRA, Jorge W.
FIOL, Juan Antonio
FLUJKA, W. Emilio
FREGA, José
GALLO, Carlos Renato
GARAY, Fermín J.
GARCÍA, Horacio

GARCÍA SOLÁ, Héctor J.
GARIBALDI, Alberto
GAROFALO, Roberto A.
GHIOLDI, Américo
GÓMEZ MACHADO, Héctor
GONZÁLEZ, Jorge
GONZÁLEZ BERGEZ, Pablo
GUTIÉRREZ, Eduardo O.
HARDOY, Emilio J.
HARRINGTON, Luis J. D.
HERRERA, Oscar A.
INSÚA, Carlos Raúl
ISLA, Rosaura
IZETTA, Gerónimo Manuel
JAROSLAVSKY, Manuel
JOFRE, Emilio
JUAREZ, Carlos Arturo
LAVALLE, Mario
LEÓN, Luis Agustín
LUCO, Juan A.
LLAYER, Santiago Felipe
LLORENS, Héctor
MÁRSICO, Adalberto O.
MARTÍNEZ RAYMONDA, Rafael J.
MASSOLO, Eduardo A.
MASTOLORENZO, Vicente
MAYA, Héctor Domingo
MÉNDEZ DOYLE, Abel Víctor
MINSK, Hugo E.
MOLINAS, Ricardo F.
MONTANI, José Jesús Mariano
MOR ROIG, Arturo
MUNIAGUERÍA, Camilo
MUSACCHIO, Vicente M.
MUSTANI, Héctor Francisco
NATELLO, Roque Oscar Alberto
NIEMBRO, Paulino
NOUGUES, Isaías J.
OBREGÓN, Pedro A.
OCAMPO, Carlos E.
ORESTE, Raúl
ORTIZ HERNÁNDEZ, Ángel H.
ORTÚZAR, Juan Carlos Felipe de
OXENFORD, Rodolfo Kitchner
PATLIS, León
PENA, Roberto M.
PÉREZ, Raúl
PÉREZ AZNAR, Ataúlfo
PESSINO, Felipe
PICADO, Estanislao
PIZARRO, Teodosio F.
POSSE, Melchor Silverio
PRAT, Longín Osvaldo
PURICELLI, Amadeo

RASINES, Osvaldo Gregorio
RATTI, Luis Carlos
REQUENA, Raúl María
RIANDE, Teresa Noemí
RIOBOO, Raúl Ricardo
RISSO, Carlos Saúl Enrique
RIVA, Raúl Edgardo
ROBERTO, Mario
ROCA, Luis Raúl
RODRÍGUEZ, Eusebio
RODRÍGUEZ DEL REBOLLAR, José
RODRÍGUEZ KESSY, Cristóbal Cleto
RODRÍGUEZ VAGARÍA, Eduardo
RODRÍGUEZ VIGIL, Francisco Rafael
ROMANO, Benito Vicente
ROUZAUT, Adolfo P.
SA, Edgar
SANUDO FREYRE, Clemente R.
SCHAPIRA, David
SCHIAFFINO, Nicolás Hipólito
SELSE, Jorge José
SIMINI, Jorge Alberto
SIMÓ, Alejo José
SOLANA, Jorge D.
SOLARI, Eduardo A.
SPERTINO, Norberto Aldo
STAINOH, Alberto
TECERA DEL FRANCO, Rodolfo José
THEDY, Horacio Ricardo
TORTONESE, Dante Oscar
TRÓCCOLI, Antonio A.
URTEAGA, Benito Florentino
VACA LOBO, Juan Manuel
VACCAREZZA, Eduardo H.
VÁZQUEZ POL, José
VEDIA, Enrique de
VIDELA, Roberto
VILLALBA, Mario Ramón
VILLAMAYOR, Roberto A.
VINALS, Fernando J.
ZADOFF, Arón
ZANONI, Juan ClAUDIO
ZARRIELLO, Raúl Jorge

AUSENTES, CON LICENCIA:

CANTONI, Ángel Serafín
FERRARI, Luis

AUSENTES, CON AVISO:

ABALO, Raúl
ACHIARY, Juan C.
CALVIÑO, Nélida Benée

CARO, José Armando
 CATALÁN, Guillermo
 ELENA, Reinaldo
 HARVEY, Ricardo J. G.
 MURATORI, Eduardo D.
 PEDRINI, Ferdinando
 PERNASETTI, Horacio
 RIERA, Fernando Pedro
 SARMIENTO, Nélida Marta
 SERÚ GARCÍA, Alberto
 TARULLI, Pascual
 VÁZQUEZ, Aurelio
 VINTI, Gerónimo

AUSENTES, SIN AVISO:

AGUIRRE CÁMARA, José
 AMURA, Luis
 ÁVILA, Eduardo Miguel
 BARCAT, Abdo
 BAZÁN RIVEROS, Sijifredo Antonio
 CORNEJO LINARES, Juan Carlos
 D'ANGELO, Eduardo Antonio
 DÍAZ, Diógenes C.
 DÍAZ O'KELLY, Felipe F.
 ESPINOZA, Silvano Ramón
 FIGUEROA, Jaime Hernán

GALEANO, Roberto A.
 LILJESTHROM, Eduardo R.
 LOZANO, Martín
 MAGLIETTI, Alberto E.
 MERCADO, José Ignacio
 MIGNO, Mario
 MONTE, Ricardo Álvaro
 ROMEU VERDIER, Gabriel
 ROSITO, M. Oscar
 SALADO, Francisco A.
 TACHELLA, Eliberto S. J.
 URANGA, Raúl Lucio

SUMARIO

- 1.—Continuación de la sesión. (Pág. 6864.)
- 2.—Contrato de trabajo. Termina la consideración del dictamen de la Comisión de Legislación del Trabajo en las enmiendas introducidas por el Honorable Senado en el proyecto de ley que le fuera pasado en revisión (orden del día 404). (Pág. 6864.)
- 3.—Moción del señor diputado **Patlis** en el sentido de que la Honorable Cámara se aparte del reglamento para considerar sobre tablas proyectos relacionados con el servicio público de transportes de la Capital Federal. Se aprueba. (Pág. 6889.)
- 4.—Servicio público de transportes de la ciudad de Buenos Aires. Consideración del asunto que se registra en el número anterior de este sumario (Pág. 6890.)
- 5.—Apéndice:

Sanción de la Honorable Cámara. (Pág. 6908.)

—En Buenos Aires, a los diecisiete días del mes de marzo de 1966, a la hora 17 y 50:

1

CONTINUACION DE LA SESION

Sr. Presidente (Mor Roig).—Continúa la sesión.

2

CONTRATO DE TRABAJO

Sr. Presidente (Mor Roig).—Prosigue la consideración en particular del dictamen de la Comisión de Legislación del Trabajo contenido en el orden del día 404, sobre contrato de trabajo: aceptación parcial de las modificaciones introducidas por el Honorable Senado (1).

(1) Véase el Diario de Sesiones del 16 de marzo de 1966, página 6810.

Corresponde votar el artículo 7º, cuya discusión quedara agotada en la reunión de la víspera. En la casa hay 107 señores diputados. Se va a llamar para votar.

Sr. Musitani.—Que se pase lista, señor presidente.

Sr. Presidente (Mor Roig).—Por Secretaría se procederá a pasar lista.

—Se pasa lista.

Sr. Presidente (Mor Roig).—En este momento hay quórum. La Presidencia encarece a todos los señores diputados que se mantengan en el recinto, puesto que en la consideración en particular del asunto que se está tratando se producirán sucesivas votaciones. Recuerda también la Presidencia que, por no funcionar el mecanismo de la votación mecánica, se va a registrar la votación por signos.

Se va a votar el artículo 7º, en el que la comisión aconseja desechar las modificaciones introducidas por el Honorable Senado.

—Resultado afirmativa.

Sr. Secretario (Oliver).—El artículo 8º no tiene modificaciones, al igual que el 9º y el 10 de la sanción de la Honorable Cámara.

En el artículo 11 la comisión aconseja aceptar las modificaciones introducidas por el Honorable Senado.

Sr. Castellanos.—Pido la palabra.

Sr. Presidente (Mor Roig).—Tiene la palabra el señor diputado Castellanos.

Sr. Castellanos.—La mayoría se ha expedido en su despacho por la aceptación de la modificación introducida por el Honorable Senado, en virtud de que la misma se refiere a la inclusión en este artículo de las siguientes palabras: «todos los trabajadores, sin distinción de sexo». Evidentemente, el Honorable Senado no ha hecho más que cumplir con el decreto ley 11.595/46, que ratificaba la convención internacional de la OIT, en la que se estableció que igual remuneración existe, sin distinción de sexo, por igual trabajo. Es el convenio número 100, del año 1951.

Por otra parte, también se deja aclarado que esta norma incluye a los trabajadores llamados contratados o changuistas, que constituyen una categoría de que se han valido con frecuencia

empresas privadas e incluso algunas del Estado, como YPF y EFEEA, para pagar menor salario a personas que realizan igual tarea que otras que se encuentran en relación de dependencia.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el despacho de la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Secretario (Oliver). — El artículo 12 no ha sido modificado por el Honorable Senado.

Con respecto al artículo 13, la comisión aconseja desechar las modificaciones introducidas por el Honorable Senado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Castellanos.

Sr. Castellanos. — No se acepta la modificación introducida por el Honorable Senado en este artículo, porque al sancionarse por esta Honorable Cámara no se hizo sino reproducir las disposiciones del sistema de la ley 11.729, que no ha traído inconveniente alguno en su aplicación práctica. Además, el criterio del inciso b) propuesto por el Senado no tiene demasiado sentido en cuanto a qué sucederá en el caso del mes de febrero. Se dice allí que si la remuneración es a jornal, por pieza o medida, cada quince días, o cada dieciséis, si corresponde por período mensual. En el caso del mes de febrero, con menor número de días, no existiría norma.

Estos son los motivos del rechazo de esta modificación.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Hardoy.

Sr. Hardoy. — Las modificaciones introducidas por el Honorable Senado no cambian la sustancia de la disposición, señor presidente. No obstante, creo que la redacción del Honorable Senado es más precisa y completa. Por estos motivos, nuestro sector va a votar a favor de la sanción que viene en revisión del Honorable Senado, y en contra de la disposición que aconseja la Comisión de Legislación del Trabajo de esta Cámara.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el despacho de la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Secretario (Oliver). — En el artículo 14 no hay modificaciones.

En cuanto al artículo 15, la comisión aconseja desechar la modificación introducida por el Honorable Senado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Castellanos.

Sr. Castellanos. — La fundamental objeción que tuvo en cuenta la mayoría de la comisión para rechazar la reforma de este artículo se refiere a la inclusión de la palabra «índole», cuando se expresa que el sueldo anual complementario «será equivalente a la dozava parte del total de salarios que por cualquier índole el trabajador haya percibido durante el año...»,

etcétera. La palabra «índole», que agrega el Senado, no presenta una acepción clara y podría prestarse a interpretaciones erróneas. Por estos motivos hemos rechazado la modificación de este artículo.

Sr. García Solá. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado García Solá.

Sr. García Solá. — Creo que el Senado introduce en este artículo otra modificación. Expresa que el aguinaldo debe pagarse «al 31 de diciembre de cada año», aclarando luego que será equivalente a la dozava parte del total de salarios que por cualquier índole el trabajador haya percibido durante el año, y que deberá pagarse en el plazo establecido en el artículo 13, es decir, en el término de siete días corridos. Creemos que esto implica una contradicción, por lo que también hemos rechazado esa reforma.

Sr. Castellanos. — Sí, señor diputado.

Sr. García Solá. — Nosotros vamos a votar favorablemente el despacho de la comisión.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Señor presidente: si bien la comisión ha rechazado el párrafo incorporado por el Honorable Senado al artículo 15, en realidad ello no significa que no comparta el criterio sustentado en ese párrafo.

El sueldo anual complementario es o un salario diferido o un sueldo más que percibe el trabajador; en consecuencia, el empleador tiene para pagarlo el mismo plazo de que dispone con relación a los demás salarios. Esta disposición debe ser interpretada concordándola con la del artículo 13, que faculta al empleador a abonar los salarios el día del vencimiento del término, sea mensual o quincenal, o bien dentro del plazo de siete días. La interpretación del Honorable Senado es la correcta; pero consideramos el párrafo como sobreabundante.

Esta es otra de las razones, que omitiera el señor diputado Castellanos, por las que no se aceptó el agregado.

Nada más.

Sr. Presidente (Mor Roig). — ¿Esa es la interpretación de la comisión, señor diputado?

Sr. Pena. — Entiendo que sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el despacho de la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Secretario (Oliver). — Con respecto al artículo 16, la comisión aconseja desechar la modificación introducida por el Honorable Senado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el despacho de la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Secretario (Oliver). — El artículo 17 de la sanción de esta Honorable Cámara no ha sido modificado.

En el artículo 18, la comisión aconseja aceptar la modificación del Honorable Senado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Castellanos.

Sr. Castellanos. — Se acepta la modificación del Honorable Senado por cuanto el criterio del control ya ha sido incorporado por la jurisprudencia a los efectos de que el patrón tenga la posibilidad de verificar la enfermedad. Pero, a la vez, no se priva al obrero de los salarios cuando la enfermedad exista efectivamente. Por esta razón se acepta la reforma.

En la primera parte del artículo se habla de «la falta de aviso oportuno». Quiero aclarar que por el término «oportuno», un tanto ambiguo, debe entenderse la primera posibilidad física que tiene el obrero impedido para dar aviso a la patronal a efectos de que ésta pueda controlar la enfermedad.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Niembro.

Sr. Niembro. — Precisamente, quiero señalar la falta de claridad del artículo 18 cuando se refiere a la falta de aviso oportuno de la enfermedad, lo que va a ocasionar dificultades para su aplicación.

La sanción de la Honorable Cámara decía que la falta de aviso de la enfermedad o accidente podía ser considerada como falta de disciplina. Pero el Honorable Senado incorporó una nueva palabra y ahora se habla de «falta de aviso oportuno», lo que puede dar lugar a muy diversas interpretaciones por parte del empleador, que será quien medirá el significado de las palabras, lo que traerá sin duda consecuencias derivadas de las medidas que se tomen con el obrero.

Puede darse el caso de que un obrero deba presentarse a su labor a las siete de la mañana y que el día anterior, sin haber tenido tiempo de notificar su imposibilidad de presentarse al trabajo, haya sufrido una indisposición de tipo pasajero que lo inhiba para concurrir al día siguiente: ajustándose a la terminología del artículo, el empleador puede considerar que el obrero no ha comunicado oportunamente su ausencia antes de la iniciación de la jornada. Como éste no es el sentido de este artículo, creo que debe aclararse lo que significa «oportuno». En algunas convenciones colectivas, como en el caso de la metalúrgica, existe un régimen de notificaciones. En caso de enfermedad, el aviso deberá ser dado en la primera mitad de la jornada. Por ejemplo, si la jornada comienza a las doce y termina a las veinte o a las veintidós, el obrero tiene un lapso de cuatro o cinco horas para notificar.

En este caso no estamos aprovechando esta experiencia y sí creando una situación de tipo ambiguo que, si no es aclarada, puede dar lugar a interpretaciones diversas y acarrear serios problemas judiciales.

Como entiendo que no es el ánimo ni la intención de los señores legisladores apartarse del es-

píritu que han tenido para elaborar este proyecto, creo que la palabra «oportuno» debe suprimirse, o aclararse debidamente su significado con amplitud.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Risso.

Sr. Risso. — Señor presidente: cuando hice la reserva de una disidencia parcial, en oportunidad de subscribir el despacho, precisamente la orienté con respecto a este artículo y, en especial, a esta palabra «oportuno» que han venido mencionando los oradores que me precedieron en el uso de la palabra.

Entiendo que esta es, típicamente, una ambigüedad o una imprecisión legislativa, pues en el plano de la relación obrero-patrón el significado de esta palabra puede dar lugar a disímiles interpretaciones. Es decir, lo que para uno es oportuno para otro puede no serlo. Se introduce un ingrediente de confusión que dará motivo a que, frente a situaciones similares, se planteen resoluciones por parte de los patronos, primero, y luego, jurisprudenciales, de orden encontrado.

El legislador tiene fundamentalmente como meta no sólo hacer la ley, sino hacerla clara, límpida, de interpretación fácil, para que luego dicha interpretación en la esfera judicial tenga en cuenta el sentido, la voluntad y la intención del legislador.

Concretamente, le solicito a la comisión —no sé si esto será reglamentariamente viable, y por ello formulo previamente la consulta— que considere la posibilidad de suprimir la palabra «oportuno» proveyendo favorablemente en esta forma al pedido que ya hemos planteado distintos señores diputados. Entiendo que de esta manera reintegramos el texto de la ley a su ubicación anterior y a la claridad que todos deseamos; sobre todo, para este artículo que se vincula con el evento desgraciado de la enfermedad.

De esta manera, y con la reserva que hice al formular la disidencia parcial, dejo planteada mi posición en lo que respecta al artículo 18 de la ley que estamos considerando.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Hardoy.

Sr. Hardoy. — Señor presidente: a mi juicio, lo inoportuno, valga la expresión, sería suprimir la palabra «oportuno» en el texto del artículo. Si el aviso no es oportuno deja de ser aviso, y la nota de oportunidad es indispensable para aplicar la figura jurídica que estamos tratando. No tendría sentido un aviso que fuera absolutamente inoportuno, y ocurriría, suprimiendo la palabra introducida por el Honorable Senado, que algunos podrían estimar que cualquier aviso a posteriori, o después del hecho consumado, fuera, sin embargo, eficaz a los fines de proteger incluso al trabajador que no cumple con sus obligaciones.

También debemos tener en cuenta que esta palabra, al igual que el texto de la ley, no va a ser interpretada solamente por el emplea-

dor, sino que también lo harán los jueces que van a valorar en cada caso la buena fe, las circunstancias particulares y las posibilidades del trabajador para avisar oportunamente. Del propio ejemplo dado por el señor diputado Niembro se desprende que las circunstancias pueden ser muy distintas y que ha habido intentos realizados en la celebración de las convenciones colectivas para eliminar dudas y determinar con precisión cómo debe ser el aviso y de qué manera se puede obtener que sea oportuno.

Esta ley, que ahora la vamos a aplicar al campo, tiene que contemplar distintas situaciones, como, por ejemplo, la que se puede dar con un puestero de un establecimiento de la Patagonia que puede estar a un día de viaje del centro del establecimiento. En este caso es evidente que no sería válido un criterio general y la nota de oportunidad es indispensable, porque el aviso que aquí puede ser oportuno allí será imposible si aplicamos el mismo temperamento.

Suprimir la nota de oportunidad significaría para algún intérprete desprevenido de la ley que no tiene importancia que el aviso sea oportuno.

Por otra parte, esto no significa dar derecho al empleador para juzgar por sí solo el criterio de oportunidad, sino que son los jueces los que van a determinar cuándo el aviso ha sido oportuno, como muy previsoriamente lo establece la sanción del Honorable Senado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Christe.

Sr. Christe. — Señor presidente: es elemental que toda notificación debe producirse en un determinado término y si ello no se establece específicamente en relación a un período de tiempo, éste debe ser determinable. Creo que la expresión «oportuno» es la más adecuada en las circunstancias actuales, porque la oportunidad tiene el significado de tiempo, del tiempo en que las cosas deben hacerse. Y el trabajador, naturalmente, debe hacer la notificación cuando corresponde cuando él está en conocimiento de la enfermedad y cuando el patrón debe saber que va a tener que prescindir del obrero o trabajador.

Por todo ello, considero que la palabra «oportuno» es indispensable en la ley, porque, de lo contrario, todo quedaría librado a la voluntad del trabajador. Además, como bien se ha dicho aquí, el alcance del término será objeto de la correspondiente interpretación por parte de los jueces. Es indudable, entonces, que no puede prescindirse de esta palabra.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado De Cara.

Sr. De Cara. — Este artículo es consecuencia del deber de asistencia que tiene la patronal con respecto a los obreros.

Estimo que es correcto el término «oportuno» y la modificación que ha introducido el Honorable Senado, porque si un trabajador está enfermo, inmediatamente tiene que poner ese hecho en conocimiento de su empleador para que éste pueda concurrir de inmediato a prestar el deber de asistencia que tiene con el empleado, es decir, darle los días que requiera para su curación y, además, controlar la enfermedad alegada.

Por estas razones, votaremos afirmativamente la modificación del Honorable Senado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — El señor diputado Risso ha formulado una consulta que la Presidencia, en su insuficiencia jurídica, no se atreve a responder y que además entiende que exige la opinión y el estudio de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Señor presidente: el Senado ha incorporado la palabra «oportuno», después de «aviso», con lo que no pretende sino calificar la forma en que debe darse ese aviso.

Esa oportunidad estará relacionada con el trabajo que se preste, la zona en que viva el trabajador los distintos medios de comunicación, etcétera. Como bien lo ha señalado el señor diputado Castellanos, la intención es que el trabajador tenga que formular ese aviso en la primera oportunidad en que se lo permitan las razones físicas, de distancia o de otra naturaleza.

Entiende la comisión que el término «oportuno» contribuye a darle precisión a este párrafo y que, en definitiva, en caso de discrepancia, como ya lo han señalado otros señores diputados, será la justicia la que tendrá que decidir.

Con respecto a la consulta del señor diputado Risso, la comisión interpreta que el artículo 71 de la Constitución Nacional, conforme a los antecedentes parlamentarios, da a la Cámara posibilidad de rechazar o aceptar los párrafos, incisos o artículos incorporados por el Senado, pero no de modificar su redacción o suprimir alguno de sus términos.

Por estas razones, la comisión mantiene su despacho. Nada más.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el despacho de la comisión.

—Resultado afirmativa.

Sr. Secretario (Oliver). — El artículo 19 de la sanción de la Honorable Cámara no ha sido modificado por el Honorable Senado, y con respecto al artículo 20 la comisión aconseja desechar las modificaciones introducidas por el Honorable Senado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Castellanos.

Sr. Castellanos. — Señor presidente: el despacho de la mayoría de la comisión ha rechazado las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al artículo 20, en virtud de que el

espíritu que guió la redacción de esa norma sancionada por esta Honorable Cámara fue la doctrina sustentada por el plenario número 58 de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que contempló la posibilidad de que si por accidente o enfermedad un obrero no puede realizar las tareas que originariamente tenía asignadas, se le deben dar otras que pueda ejecutar.

Pero el Honorable Senado ha introducido la modificación de que el obrero que se encuentra en esas condiciones, es decir, con un menor rendimiento, también perciba un menor salario, que puede llegar a ser un 25 por ciento inferior del anterior. Ello convierte, entonces, en ilusorio el derecho del trabajador de mantener incólume su salario. Debe tenerse en cuenta, como fundamento de lo que expresamos, el deber de previsión del empleador, quien así como se capitaliza y extrae ganancias de la actuación y de la capacidad laborativa del trabajador, debe soportar también correlativamente las disminuciones no culpables de esa capacidad.

Aceptar esta modificación entrañaría dejar abierto el camino a una serie de maniobras patronales de tipo especulativo, ya que rebajando un 24 por ciento el salario de un obrero incapacitado o enfermo dejaría al trabajador sin posibilidad de considerarse despedido, ya que la disminución no llega al 25 por ciento que establece este artículo.

Mantenemos, pues, nuestra sanción, ya que si el empleador que lucra con el esfuerzo de los trabajadores, puede llegar a verse privado de una pequeña porción de esas ganancias, el trabajador, en caso contrario, se verá privado del salario, que no es sólo la contraprestación debida por su trabajo, sino que tiene también un carácter asistencial y vital.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Stainoh.

Sr. Stainoh. — Señor presidente: el artículo 20 sancionado por esta Honorable Cámara de Diputados se refiere a la conservación del cargo después de tres o seis meses, aludiendo al plazo de vencimiento para el mantenimiento del empleo en el año. Un principio jurídico, aforismo tradicional, expresa *qui potest plus, potest minus*, quien puede lo más, puede lo menos. Debe, pues, entenderse claramente que la omisión de la expresión «durante el plazo de un año» no significa que se la excluya y que el trabajador quede, como en aquella vívida alusión del cuadro del pintor argentino Ernesto de la Cárcova *Sin pan y sin trabajo*, después de vencidos los plazos de tres o seis meses, según fuere su antigüedad laboral, menor o mayor de cinco años.

Ha de preservárselo del desamparo, si después del reposo preventivo y terapéutico, el déficit orgánico o la disminución física estén precisados y el trabajador se hallare en condiciones de reclamar trabajo. Un fallo plenario muy conocido mantiene el concepto que ya se des-

prendía de la redacción del tercer apartado del artículo 155 del Código de Comercio (ley 11.729), norma que estatuye: «El empleado conservará su puesto y si dentro del año transcurrido después de los plazos de tres y seis meses indicados...» El acuerdo extendió los mismos beneficios que por otro plenario del 26 de agosto de 1953 la Cámara Nacional del Trabajo de la Capital reconoció para la incapacidad derivada de accidentes del trabajo. Con motivo del caso «Alvarez, Juan contra Feit Olivari Limitada», del 7 de octubre de 1959, estableció: «Durante el período de conservación del puesto a que se refiere el tercer apartado del artículo 155 del Código de Comercio (ley 11.729) el trabajador que no está en condiciones físicas para realizar sus tareas habituales, sino para desempeñar otras más livianas compatibles con su estado de salud, tiene derecho a que el patrono lo reintegre, asignándole este último tipo de tareas».

La interpretación auténtica de una ley debe basarse en el conocimiento consciente de la norma, de su valor y de su fin; no es sólo la letra sino también el espíritu de la ley lo que el intérprete debe conocer. La *mens legis* surge y luce cuando el Poder Legislativo considera sus propias leyes para determinar su alcance.

No he de fatigar la atención de la Honorable Cámara citando fallos clásicos de la Corte Suprema de Justicia, como aquellos del tomo 114, página 298, «Ferrocarril de Buenos Aires y Puerto de la Ensenada contra gobierno nacional»; tomo 124, página 153, «Luis S. Martínez contra Delfín E. Hoyos»; tomo 127, página 106, «Levik y Compañía contra gobierno nacional»; tomo 150, página 150, «Compañía Azucarera de Tucumán contra provincia de Tucumán». De ellos resulta que la interpretación auténtica de la ley es la opinión de los que explican y fundamentan el proyecto legislativo. Por lo tanto, sólo agregaré que es una regla de sana crítica desechar toda interpretación que pueda llevar al absurdo, porque la intención del legislador, conforme con su misión, no puede ser otra que la de dictar disposiciones de acuerdo con la razón y el bien público y atendiendo a los principios de equidad y de justicia.

Por ello, la opinión del señor presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo tendrá un valor vital para que ninguna sentencia judicial esté caldeada en el molde del error, que no parta de premisa mayor de silogismo equívoco, para que carezca de vistos y resultandos, considerando vacilantes o con decisiones estrechas y restrictas. Siendo esto así, me permito preguntar a la Comisión de Legislación del Trabajo, por vía de su presidente, si al enunciar el artículo 20 «vencido el plazo de conservación del empleo», también incluye lo menos, o sea, que durante el lapso hasta un año el obrero también tendrá derecho a reintegrarse.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Hardoy.

Sr. Hardoy. — Señor presidente: todos estamos de acuerdo con el espíritu general y con las finalidades de esta disposición. Conviene señalar que la parte cuestionada se refiere al caso concreto en que el obrero se encuentre en la imposibilidad de desempeñar las tareas que cumplía anteriormente y al caso en que esto no es imputable al patrono de ninguna manera. Obsérvese que en los dos casos, también en la redacción del Senado, el empresario debe darle al trabajador la oportunidad de cumplir otras tareas que pueda ejecutar.

El problema se plantea cuando el trabajador no puede ejecutar esas tareas. En estas circunstancias la sanción del Senado no perjudica sino que beneficia al trabajador, porque crea una alternativa que puede ser interesante para él, cual es la de conservar el empleo. Aunque la remuneración sea más reducida, seguramente siempre será más alta que la que pueda conseguir fuera de esa empresa donde trabajaba hasta entonces, porque, lamentablemente, su capacidad de trabajo ha disminuido y no por culpa del empresario sino a causa de una enfermedad inculpable.

Obsérvese que en el afán de beneficiar al obrero se lo puede perjudicar, al fin de cuentas. Incluso el empresario puede tener interés en conservar a ese trabajador, con el que puede tener lazos afectivos, pero no estar en condiciones de pagarle un salario íntegro por las condiciones económicas de la empresa. Por eso me pregunto cuál es la razón para no aceptar la redacción del Senado, pues con la redacción de esta Cámara el trabajador irá indefectiblemente a la calle; percibirá ciertamente la indemnización, pero perderá la oportunidad de conservar su empleo con una remuneración reducida en sólo un veinticinco por ciento. Por estas razones de equidad y de interés práctico, nosotros vamos a sostener la conveniencia de que se acepte la enmienda del Senado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Risso.

Sr. Risso. — Nosotros sostenemos que debe rechazarse el texto del artículo 20 que propone el Senado, ya que el originalmente redactado y sancionado por esta Cámara consulta el objetivo del legislador y no da pie a ninguna de las circunstancias que el señor diputado Hardoy ha señalado.

El texto original señala que el trabajador que ha sufrido la enfermedad o accidente, vencidos los períodos fijados para su reincorporación —es decir, tres o seis meses— cuenta además con un adicional de un año durante el cual el patrón deberá mantenerle el puesto si la enfermedad o accidente le impide reintegrarse a él. La cláusula de protección inserta en este artículo respecto del pago de indemnización en el supuesto

de que el trabajador, por razón de ese trauma, no pueda reintegrarse después de ese año de espera a sus labores, juega también de un modo relativo, en cierta forma.

La preocupación del señor diputado Hardoy, que es plausible desde todo punto de vista, está contemplada en la situación de hecho que se da en la relación obrero-patronal. Si el trabajador no está en condiciones de reintegrarse porque le ha quedado una incapacidad física que le impide desempeñarse normalmente en las labores que realizaba anteriormente, el artículo fija como exigencia que deberá ser indemnizado en los términos del artículo 39, inciso 3º, apartado B). Pero ¿qué cláusula de esta ley se opondría a que ese patrón, como lo quiere el señor diputado Hardoy, conserve a ese trabajador porque tiene otras virtudes además de aquella que tenía cuando ejercitaba normalmente sus funciones? ¿Qué disposición de esta ley se opone a que el patrón retenga a ese trabajador en otras tareas, si la propia redacción de este artículo así lo posibilita?

Lo que nosotros rechazamos por regresivo, porque no consulta el evento de la enfermedad o del accidente, es que se pretenda que la reincorporación, vencido ese año de espera, se opere con una rebaja del 25 por ciento del salario. Esto sería de alguna manera como admitir una causal de reducción del salario del trabajador, nunca contemplada por la legislación.

Sr. Hardoy. — ¿Me permite, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Risso. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor diputado Hardoy.

Sr. Hardoy. — En razón de las dificultades con que tropezamos con el sistema de altavoces de la Honorable Cámara, se oye mal y ello hace más difícil seguir el pensamiento del señor diputado. Trataré de explicarme con más claridad para ver si coincidimos.

Decía, señor presidente, que con la redacción de la sanción de la Cámara de Diputados el empresario tiene la opción de reincorporar al trabajador, pagándole el mismo salario —a ello está obligado—, o de despedirlo, si lo desea, abonándole la indemnización correspondiente. Pero puede ocurrir que al obrero le convenga mantener su trabajo aunque sea con un salario reducido en un veinticinco por ciento, porque quizá una vez fuera de la empresa donde trabajó toda su vida le resulte difícil conseguir otro trabajo o lo obtenga en condiciones inferiores. Esta es la alternativa, que puede resultar beneficiosa para el obrero.

Hago abstracción de la actitud, regresiva, respetable o no del empresario que procede de esta manera, pero lo cierto es que con la sanción de esta Cámara el trabajador pierde la oportunidad de conservar su empleo, aunque vea reducida su remuneración en la cuarta parte.

Sr. Presidente (Mor Roig) — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Risso.

Sr. Risso. — Pese a la aclaración del señor diputado Hardoy, creo que el artículo 20 de la sanción de Diputados es por demás claro. Señala que el trabajador puede reincorporarse a sus tareas, y que si en razón de la secuela de la enfermedad o del accidente no pudiera desempeñarse en aquellas que venía cumpliendo, podrá ser destinado a otras, pero de ninguna manera el criterio del legislador ha sido el de privarlo del 25 por ciento ni de ninguna porción de su salario.

El orden es distinto al que establece el señor diputado Hardoy; en primer lugar, procede la reincorporación en el mismo puesto que venía ocupando; luego, la posibilidad de que ocupe otro puesto en la misma empresa, y, recién en tercer término, la posibilidad de la indemnización si el trabajador no puede reincorporarse a su puesto anterior y el patrón no tiene otro que ofrecerle. Estimo que el artículo contempla todas las hipótesis que pueden plantearse al respecto.

En cambio, el artículo redactado por el Senado no contempla esta inquietud y establece una odiosa diferencia para aquel trabajador que ha sufrido el trauma de la enfermedad o del accidente y sus secuelas, que le impiden reintegrarse normalmente a sus tareas. A ese 25 por ciento lo calificaba de regresivo, pero la expresión no es original ya que el señor diputado Raúl Fernández, la víspera, utilizó esa misma expresión. No participamos del criterio de aprovechar de una circunstancia desgraciada en la vida de un trabajador para retacearle o reducirle el salario, porque ello implicaría, de alguna manera, no legislar con el sentido socio-económico que este tipo de leyes debe tener necesariamente.

Por otra parte, hay que hacer un argumento que creo es decisivo. El evento del accidente o enfermedad genera para las dos partes de la relación laboral una situación de pérdida. Para el obrero que en cumplimiento de sus funciones se accidenta o sufre una enfermedad inculpa-ble, se supone que no ha querido el daño ni la circunstancia que lo provoca. Para el patrón, se estima que tampoco lo ha querido así. Pero frente a la disyuntiva de si hay un mayor perjuicio para una de las partes, entiendo que, desde el punto de vista económico, en la relación obrero-patronal no es difícil decidir. Si el obrero sufre la disminución o incapacidad, producto de la enfermedad o del accidente, que le queda como secuela definitiva; en el peor de los casos, la consecuencia que debe afrontar el patrón frente a ese evento sufrido por el obrero, es la de indemnizarlo. Yo creo que éste es el sentido de las leyes laborales, y muy especialmente el de una como ésta, que regla el contrato individual de trabajo.

Sr. Hardoy. — ¿Me permite una brevísimas aclaración, señor presidente?

Sr. Presidente (Mor Roig). — Si no tiene inconvenientes el señor diputado Ocampo.

Sr. Ocampo. — No, señor presidente; le cedo la palabra.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado Hardoy.

Sr. Hardoy. — Simplemente deseo señalar que nada puede impedir con este texto que el empresario despida al obrero, aunque tenga que pagar cualquier indemnización. Ese obrero, con su capacidad disminuida, difícilmente va a conseguir trabajo en otra parte, pues ¿qué empresario va a darle trabajo pagándole lo mismo que a los que están en la plenitud de su capacidad?

Esta es la realidad, y es lo que me preocupa, no por el empresario sino por el obrero. En este momento está lejos de mi espíritu proteger al empresario en estas emergencias, que se darán muy pocas veces y que van a incidir con un monto muy pequeño en la suerte económica de la empresa. Me interesa, en cambio, el obrero, el trabajador, al que se le va a pagar la indemnización, que gastará y luego no conseguirá trabajo en otra parte.

De este modo le estamos cerrando a ese trabajador las puertas para que continúe trabajando en la empresa a la cual le dio tal vez muchos años de su vida.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Ocampo.

Sr. Ocampo. — Consideramos que la modificación introducida por el Senado a este artículo es inaceptable.

La sanción originaria de la Cámara de Diputados tendía a institucionalizar un derecho consagrado en forma unánime por la jurisprudencia de la Capital, basado en el principio de solidaridad social dirigido a garantizar al obrero accidentado el derecho a conservar su trabajo.

Esta breve consideración y las ya expresadas por los otros señores miembros de la Comisión de Trabajo nos mueven a rechazar la modificación introducida por el Senado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — En primer término, contestando a un interrogante que dejó planteado el señor diputado Stainoh, diré que la interpretación por él sustentada corresponde al espíritu con que los redactores del proyecto y del despacho de la comisión formularon el segundo párrafo del artículo 20.

Es evidente que cesada la causal, enfermedad o accidente, que le obliga a interrumpir sus servicios, puede solicitar inmediatamente la reincorporación sin necesidad de tener que esperar el vencimiento del plazo. Esa es la interpretación de la comisión, y en este sentido queda perfectamente aclarado este párrafo.

Por otra parte, ello también resulta así de interpretar este párrafo en concordancia con el párrafo primero, en el que se utiliza la expresión «durante el plazo de un año».

Respondiendo a algunas de las apreciaciones formuladas por el señor diputado Hardoy, diré que la hipótesis por él planteada tiene solución. Si el trabajador y el empleador están de acuerdo, el primero en aceptar su reincorporación con un salario inferior al que recibía con anterioridad, y el segundo en admitirlo en esas condiciones, nada impide que esto se realice. Habrá en este caso por mutuo acuerdo una modificación de los términos del contrato de trabajo. Pero es indudable que tarifar la disminución posible del sueldo nos parece inconveniente, y ésta es la razón fundamental por la cual la comisión insiste en la sanción originaria y desecha la modificación incorporada por el Senado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Gallo.

Sr. Gallo. — Brevemente deseo significar que al mantenerse el dictamen de esta Cámara en primera instancia, vamos a ser consecuentes con el principio jurídico que ya hemos establecido cuando aprobamos el estatuto para el personal de Correos y Telecomunicaciones, donde justamente se le establece esta legalización laboral con respecto al obrero o empleado impedido después de un accidente de trabajo. Es decir que colocamos en este caso en un pie de igualdad al Estado empleador, con el empleador privado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Christe.

Sr. Christe. — A esta altura del debate no tienen mucha importancia los conceptos que voy a expresar. En realidad, apoyo la sanción del Senado porque la considero justa.

Con el concepto del riesgo profesional, claro está que habría que pagarle siempre al obrero. Incluso no habría por qué hacer ese distinguo del año durante el cual se conserva el trabajo ni otras aclaraciones semejantes. Pero en el caso debemos partir de este presupuesto: si transcurridos los tres o seis meses de suspensión y el año posterior en que se debe conservar el empleo, el trabajador está en condiciones de volver al trabajo para ocupar otras funciones, es seguro que se ha de encontrar en situación de disminución de sus aptitudes y, consiguientemente, el patrón sufrirá una lesión. Si, por el contrario, el patrón puede darle una ubicación donde este trabajador pueda desempeñarse, no sufrirá la lesión pero, de cualquier manera, esto contribuye a favorecer la situación del trabajador. En consecuencia, en una distribución que podríamos calificar de justiciera de los intereses, es lógico que un 25 por ciento del salario se acuerde como retribución al patrón, por la actitud que se le exige en favor del trabajador. Esa es la forma en que yo interpreto esta disposición.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a llamar para votar.

—Se llama para votar.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia informa que en la casa hay 120 señores diputados y en el recinto faltan 10 señores diputados para lograr quórum.

La Presidencia ruega a los presidentes de bloques que procuren mantener en el recinto sus respectivas representaciones.

—Mientras se llama para votar.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia informa que acaba de impartir instrucciones al personal de policía de la casa para que impida el acceso a la rotonda de toda persona ajena al cuerpo, y se prohíbe a la vez el aviso de la presencia de visitantes a los señores diputados, todo ello a fin de facilitar la realización normal de la sesión. (*¡Muy bien!*)

En estos momentos hay quórum estricto. Se va a votar el artículo 20 conforme con el despacho de la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Secretario (Oliver). — En el artículo 21 la comisión propone aceptar la modificación introducida por el Honorable Senado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Castellanos.

Sr. Castellanos. — En efecto, señor presidente, el Honorable Senado ha cambiado la palabra «término» por «tiempo», y como esta expresión es más adecuada a los fines de la interpretación del artículo, la comisión ha aceptado la reforma.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el despacho de la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Secretario (Oliver). — El Honorable Senado ha introducido un artículo 22 nuevo, que la comisión aconseja desechar.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Castellanos.

Sr. Castellanos. — El despacho de la mayoría no acepta el artículo nuevo introducido por el Honorable Senado por cuanto excluye a los trabajadores a domicilio de los beneficios mencionados en los artículos 17 a 21 de esta ley, beneficios que se refieren a la enfermedad inculpable y a los accidentes.

La comisión ha entendido que luego del debate habido en esta Honorable Cámara el 20 de octubre de 1965, en el que intervinieron varios legisladores, y muy principalmente los señores diputados Raúl Fernández, Rizzo, Ocampo y Vedia, ha quedado perfectamente en claro que los beneficios establecidos por esta ley deben extenderse en su totalidad a los trabajadores a domicilio.

La dificultad que surge en el caso particular del trabajador a domicilio que, en caso de enfermedad, trabaje simultáneamente para varios empleadores y/o que en su tarea se haga ayudar

por un familiar o aprendiz. Pero ese hecho, a nuestro entender, no es causal suficiente como para que la justicia, oportunamente, no pueda determinar la forma del pago de la enfermedad o del accidente en forma proporcional o del modo que lo considere equitativo.

Por otra parte, estimo que estos beneficios que establece la ley serán recogidos en el estatuto legal que para estos trabajadores está preparando la Comisión de Legislación del Trabajo y cuyo estudio está casi concluido. Mientras tanto, los trabajadores a domicilio están protegidos.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Riso.

Sr. Riso. — Señor presidente: como lo adelantara en oportunidad del tratamiento en general, en que di sucintamente las razones que abonaban nuestra posición de exclusión de la propuesta del Honorable Senado, la disyuntiva consiste en lo siguiente. Si admitimos la inclusión del artículo 22 nuevo, los trabajadores a domicilio protegidos por la ley 12.713 quedan desamparados en cuanto al evento de enfermedad o accidente. En cambio el rechazo implica, lisa y llanamente, consider a esos trabajadores ubicados en el ámbito de este contrato de trabajo.

Para esto hay más que una razón estrictamente jurídica, que bien puede derivarse de la necesidad de dictar el estatuto específico de los trabajadores a domicilio, que ya está sometido a la consideración de la comisión pertinente de la Cámara y que, Dios mediante —y es el propósito de los integrantes de esa comisión—, será puesto a la brevedad a la consideración de este cuerpo.

Mientras tanto, el profundo contenido humano y social de este proyecto, y los fines que se persiguen tutelando a los trabajadores, hacen preferible que el juez frente al caso de un trabajador a domicilio que haya tenido que soportar enfermedad o accidente, cuando deba decidir si es viable el pago de la indemnización que las circunstancias le acuerdan por imperio de este contrato de trabajo, lo haga resolviendo sobre las cuestiones de hecho.

Alguien ha aludido a los inconvenientes que se plantearían para que el patrón se hiciera cargo del cumplimiento de las obligaciones que establece este contrato de trabajo para la generalidad de los trabajadores. En el caso del trabajador a domicilio se plantearía el problema de distinguir cuál de los patrones, en el caso de que el obrero trabajara para varios, tendría a su cargo el pago de ese beneficio.

Otros señalan la circunstancia de que, en muchas ocasiones, el trabajador a domicilio se nace ayudar por los miembros de su familia o por otras personas, lo que determinaría una suerte de injusticia en caso de que el patrón tuviera que pagar un salario por enfermedad o accidente, desproporcionado a lo que el obrero produce con su solo esfuerzo. Por ejemplo, tendría

que pagar un beneficio que surge del trabajo del grupo familiar, determinando de esta manera una notoria injusticia para el patrón.

Entiendo que no podemos parar mientes sólo en los casos hipotéticos, imposibles o de muy difícil solución. El juez, con los medios a su alcance, con las medidas para mejor proveer, podrá determinar si el obrero tiene varios patrones, en qué proporción ha venido trabajando con cada uno. Establecido eso, podrá calcularse la proporción en que los patrones deberán soportar el cumplimiento de las obligaciones que emergen de la ley. A la inversa, si el obrero no trabaja solo, sino que lo hace ayudado por los miembros de su familia, por la misma vía podrá determinar el juez cuántos son los que integran el núcleo familiar, cuántos son los que trabajan habitualmente o colaboran con el trabajador a domicilio, y conforme a esa estimación y a lo que produce cada uno de ellos, pero en especial teniendo en cuenta al sujeto accidentado o enfermo, podrá también esclarecer el pago de las indemnizaciones o salario que correspondiera.

Entiendo que esta solución, que por encima de todas las cosas es práctica, sumamente viable y al alcance de todos los jueces, es la que debe sustentar en este caso la Honorable Cámara cuando rechaza la inclusión de este nuevo artículo 22 propuesto por el Honorable Senado. Esta es también concretamente, la posición de nuestro bloque.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Fernández.

Sr. Fernández. — Señor presidente: en la sesión de ayer di las razones que fundamentaban mi tesis de rechazo de este nuevo artículo que propone el Honorable Senado.

Es verdad que el trabajador a domicilio tiene algunas modalidades que en algunos casos hacen dificultoso aplicar estas disposiciones relativas a las enfermedades y a los accidentes inculpables. Sin embargo, la jurisprudencia de nuestros tribunales ha resuelto numerosos casos, con ese criterio de justicia y de equidad a que hacía referencia el señor diputado Riso, en favor de estos trabajadores incluyéndolos dentro de los beneficios de la ley 11.729. Es por ello que voy a referirme solamente a título ejemplificativo a dos casos resueltos teniendo en cuenta el criterio jurisprudencial, porque son claros, definitorios y nos ubican debidamente dentro de este problema del trabajador a domicilio.

Con fecha 20 de octubre del año 1943 la Cámara de Apelaciones del Trabajo, en su sala cuarta, ha sostenido que «tratándose de un trabajador a domicilio que reúne las condiciones de permanencia, de profesionalidad y de subordinación jurídica hacia el empleador, se encuentra amparado por la ley 11.729 en cuanto a las enfermedades inculpables que contempla el artículo 155 de la misma». El otro pronunciamiento se refiere a un caso análogo y determina que «el trabajador a domicilio se encuentra ampa-

rado por la ley 11.729 en lo que respecta al pago de los salarios por enfermedad cuando la relación jurídica entre las partes ofrece características de profesionalidad, dependencia y continuidad». Esta es la opinión sostenida por la Cámara de Apelaciones del Trabajo, en su sala cuarta, el 9 de octubre de 1948.

Vuelvo a repetir que es verdad que las normas tuitivas de la ley 11.729 ofrecen algunas dificultades para ser aplicadas a los trabajadores a domicilio dadas la naturaleza y modalidad de sus tareas. Pero lo que hay que buscar, como muy bien lo ha señalado la jurisprudencia que acabo de mencionar, es la circunstancia de la dependencia o subordinación, así como también la profesionalidad y la permanencia, para no excluir a estos obreros de los beneficios de que gozan los demás trabajadores. Lo contrario sería atentar contra el principio de igualdad e implicaría, también, desconocer los más elementales principios de una auténtica justicia social, que la Unión Cívica Radical del Pueblo ha preconizado durante toda su existencia.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a llamar para votar.

—Se llama para votar.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el despacho de la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Secretario (Oliver). — El artículo 22 de la sanción de esta Honorable Cámara también ha sido modificada por vía del artículo 23 de la sanción del Honorable Senado, y la comisión aconseja aceptar la modificación.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Castellanos.

Sr. Castellanos. — La comisión acepta la modificación del Senado porque es más explicativa y se refiere al caso de una trabajadora que se encuentra embarazada, en cuyo supuesto deberá hacer saber esa circunstancia al empleador acreditándolo mediante certificación médica. Si el empleador insiste en el despido, deberá abonarle, además de la indemnización por despido injustificado, la especial a que se refiere este artículo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Risso.

Sr. Risso. — Originariamente fui el autor de este artículo y, aunque la modificación del Honorable Senado es formal, entiendo que es atendible, que evita confusiones. Si el empleador no se hubiese enterado del embarazo de la trabajadora con antelación al despido, este artículo da la oportunidad al patrón, ante el conocimiento del hecho, de que insista o no en la medida.

La modificación de la palabra «empleada» por «trabajadora» no aporta mayor claridad, pero

puede aceptarse porque así se uniforma la terminología que se sigue a lo largo de todo el texto.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el despacho de la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Secretario (Oliver). — El artículo 23 de la sanción de Diputados también ha sido modificado por el Honorable Senado y la comisión aconseja aceptar la modificación.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Castellanos.

Sr. Castellanos. — La comisión acepta porque la modificación del Senado es simplemente formal.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el despacho de la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Secretario (Oliver). — El artículo 24 también ha sufrido modificaciones que la comisión aconseja desechar.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Castellanos.

Sr. Castellanos. — No se acepta la modificación de los casos establecidos en el proyecto originario en virtud de que esta Cámara ha establecido días hábiles en su proyecto y el Honorable Senado fija días corridos. Hemos mantenido este sistema por cuanto el cómputo de vacaciones por días hábiles tiende a asegurar al trabajador un período real de vacaciones ya que el sistema de días corridos se presta a ciertas trampas mediante la concesión de las vacaciones en épocas en que se acumulan feriados, como en Navidad, Año Nuevo, Carnaval, Semana Santa, etcétera.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Ocampo.

Sr. Ocampo. — Nuestra posición con respecto a este problema es bien clara y terminante y ya la dejamos sentada en ocasión de producirse el debate en general.

Nosotros consideramos, ratificando lo expuesto por el miembro informante de la comisión, que el cómputo para las vacaciones debe ser de días hábiles y no corridos. Ello ha sido sentado en general por la jurisprudencia con respecto a las convenciones colectivas de trabajo, y nosotros queremos institucionalizar ese criterio y establecer la igualdad para todos los trabajadores, de modo que este aspecto no quede librado a las convenciones particulares.

Por ello, nosotros ratificamos lo manifestado por el señor miembro informante y votaremos por el rechazo de la enmienda introducida por el Honorable Senado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Hardoy.

Sr. Hardoy. — Muy brevemente voy a sostener la conveniencia de que se acepte la modi-

ficación del Honorable Senado que mantiene el criterio que hasta ahora ha regido en la materia. La preocupación de que los feriados disminuyan el período de vacaciones demostraría, en todo caso, que en nuestro país existen seguramente demasiados feriados. Lo importante es que el trabajador goce de un período continuado de vacaciones suficiente para que se logren los benéficos efectos que naturalmente debe producir.

Por ello y teniendo en cuenta lo que establece la legislación comparada y la experiencia de nuestro país, nos inclinamos a aceptar la enmienda del Honorable Senado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Señor presidente: el Honorable Senado ha introducido en este artículo dos modificaciones: en lo que se refiere al término de los períodos de vacaciones, aumentándolos en cada caso en cinco días, y en cuanto a la forma de computarlos, estableciendo que será por días corridos.

La comisión ha considerado que debe desecharse la reforma del Senado porque, seguramente por inadvertencia, no ha tenido en cuenta que con este sistema se favorece a los trabajadores de menor antigüedad, pues es evidente que a un trabajador con quince días de vacaciones no le quedarán comprendidos dentro de ese período sino dos días feriados, mientras que a un trabajador con treinta y cinco días de vacaciones, como el caso extremo, seguramente le quedarán comprendidos cinco o más feriados. Y, evidentemente, quien más necesita de ese descanso es el trabajador con mayor antigüedad.

Esas han sido las razones por las cuales la comisión ha desechado las modificaciones introducidas por el Honorable Senado y aconseja a la Cámara mantener la sanción originaria.

Nada más.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el despacho de la comisión.

— Resulta afirmativa.

Sr. Secretario (Oliver). — El artículo 25 de la sanción de la Honorable Cámara también fue objeto de modificaciones por parte del Honorable Senado. La comisión aconseja desecharlas.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En consideración.

Tiene la palabra el señor diputado Castellanos.

Sr. Castellanos. — No se acepta la modificación introducida en este artículo por el Honorable Senado, principalmente porque su inciso a) dice: «cuando el trabajador y el empleador lo solicitaren de común acuerdo», refiriéndose a las vacaciones. Esto permite que en la práctica las vacaciones las fije el patrón, porque todos sabemos que en definitiva la elección de la fecha es una cuestión que siempre ha tratado de decidir la patronal.

Por estas consideraciones, y en virtud de que el común acuerdo de que se habla en la modificación introducida por el Senado variaría la estructuración que se dio a la ley, nos oponemos a tal modificación.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado García Solá.

Sr. García Solá. — Observo que el presente artículo se refiere al período dentro del cual deben otorgarse las vacaciones. Para la hipótesis de vacaciones que se otorguen fuera de ese período, la sanción original de esta Cámara prevé dos situaciones: que las características de la actividad así lo exijan, o que exista disminución o falta de trabajo no estacionales y se favorezcan los intereses del trabajador. El Senado ha agregado a estas dos situaciones una tercera: cuando el trabajador y el empleador solicitaren, de común acuerdo, el cambio de período.

No obstante que esta ley es de orden público, me parece que frente a esta circunstancia concreta, conviene admitir la innovación que introduce el Senado porque facilita el mecanismo del instituto. Por otra parte, no creemos que ella perjudique al trabajador; antes bien, lo puede beneficiar, y si así lo expresan él y el empleador, no vemos qué razón lógica puede existir para oponerse al acuerdo de partes para el otorgamiento de vacaciones fuera del período que establece la ley.

Por estas razones, vamos a votar favorablemente la modificación introducida en este artículo por el Honorable Senado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Hardoy.

Sr. Hardoy. — Es para decir, muy brevemente, que nos inclinamos por la aceptación de la enmienda del Honorable Senado, porque no creemos que se pueda alterar la verdadera voluntad del trabajador, dado el progreso a que actualmente ha llegado nuestra República en esta materia. El control que ejercen las autoridades y los sindicatos, así como la conciencia que los trabajadores han adquirido de sus derechos, demuestran que la posibilidad de que los empleadores los presionen para imponerles un régimen de vacaciones que no les convenga es muy remota; a mi juicio, prácticamente imposible. Por el contrario, me parece útil facilitar el entendimiento de las partes a fin de que ellas lleguen normalmente a acuerdos en todo lo que se refiere a la mejor manera de trabajar y también, lógicamente, en lo que respecta al mejor procedimiento para posibilitar el descanso del trabajador.

Por todas estas razones, y confiando en la responsabilidad de empresarios y trabajadores, votaremos por la aceptación de la enmienda introducida por el Honorable Senado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Risso.

Sr. Risso. — Es al solo efecto de insistir en la necesidad de que el cuerpo se pronuncie por el rechazo de lo propugnado por el Senado.

El argumento que voy a exponer surge del propio texto de la modificación propuesta por ese cuerpo. Si admitiéramos el inciso a), que dice: «Cuando el trabajador y el empleador lo solicitaren de común acuerdo», estaríamos desvirtuando, lisa y llanamente, el resto de este artículo. Explicaré por qué.

El artículo que consideramos establece el período dentro del cual el trabajador deberá gozar de vacaciones. Además, la ley reconoce al empleador potestad para que, dentro de ese período, disponga en qué fecha ha de otorgar las vacaciones. Si se agregara la cláusula por la cual la autoridad de aplicación podrá autorizar la concesión de vacaciones en períodos distintos «cuando el trabajador y el empleador lo solicitaren de común acuerdo», las vacaciones se otorgarían fuera del período que la propia ley establece, con lo cual estaríamos desvirtuando lo que hemos querido legislar.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el despacho de la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Secretario (Oliver). — El artículo 26 también ha sido motivo de modificaciones, que la comisión aconseja desechar.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Castellanos.

Sr. Castellanos. — No se ha aceptado la modificación introducida por el Honorable Senado al texto de este artículo porque elimina un principio fundamental y una conquista establecida por el proyecto aprobado por la Honorable Cámara al admitir las vacaciones proporcionales. Por otra parte, el Honorable Senado ha vuelto al sistema del calendario, eliminado del proyecto de esta Honorable Cámara por ser motivo de serias perturbaciones en el planteo de los casos judiciales.

Estos son los motivos por los cuales la comisión aconseja desechar las modificaciones introducidas por el Honorable Senado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el despacho de la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Secretario (Oliver). — El artículo 27 también ha sido motivo de modificación por parte del Honorable Senado y la comisión aconseja su aceptación.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Castellanos.

Sr. Castellanos. — Es tan sólo para aclarar que en el texto del despacho de la comisión debe corregirse el número del artículo que se menciona al final, que en vez de 30 debe ser 29, porque se mantiene la numeración de esta Honorable Cámara.

Sr. Presidente (Mor Roig). — En la sanción de la Honorable Cámara la mención es correcta: cita el artículo 29.

Se va a votar el despacho de la comisión, con la salvedad formulada.

—Resulta afirmativa.

Sr. Secretario (Oliver). — El artículo 28 no ha sido modificado.

El artículo 29 ha sido modificado por el Honorable Senado y la comisión aconseja desechar la modificación.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Castellanos.

Sr. Castellanos. — No se acepta la modificación introducida por el Honorable Senado por cuanto altera los principios establecidos en la sanción de esta Cámara, extendiendo hasta dos períodos inmediatamente anteriores al que se va a tomar para acumular las vacaciones no gozadas; esto es, para el caso hipotético de que un patrón hubiese pagado las vacaciones no gozadas por el obrero, éste tendrá derecho a acumular hasta dos períodos inmediatos. El principio que se ha tenido en cuenta es el de resguardar la salud física del trabajador, que necesita descanso, no siendo susceptible de una compensación en dinero.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el despacho de la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Secretario (Oliver). — El artículo 30 también ha sido modificado por el Honorable Senado y la comisión aconseja desechar la modificación.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Castellanos.

Sr. Castellanos. — No se acepta tampoco esta modificación, en virtud de que la enmienda consiste en la adición de un párrafo que se refiere a «el alta de la causa», concepto que ocasionaría dudosas interpretaciones desvirtuadoras del principio tenido en cuenta: el de que las vacaciones no se otorgarán durante las interrupciones debidas a accidentes o enfermedades inculpables ni durante el plazo de preaviso, como lo establece el artículo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Señor presidente: creo que conviene dejar aclarado que la comisión entiende que conceptualmente el párrafo agregado por el Honorable Senado es una interpretación correcta del artículo, pero que por razones simplemente de redacción, con las que discrepamos, no se ha aceptado. Evidentemente es justo que el accidente o enfermedad inculpable ocurrido durante el período de vacaciones determinen la suspensión de éstas, las que se completarán al

cesar la causa que originó la interrupción. Tal es el sentido de esta disposición, que debe quedar al menos como interpretación de la comisión.

Nada más.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el despacho de la comisión.

— Resulta afirmativa.

Sr. Secretario (Oliver). — El artículo 31 de la sanción de la Cámara de Diputados no ha sido objeto de modificaciones. En cambio, el artículo 32 ha sido modificado por el artículo 33 de la sanción del Honorable Senado, modificación que la comisión aconseja desechar.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Castellanos.

Sr. Castellanos. — La comisión tampoco acepta la modificación introducida al artículo original, por cuanto en el mismo se han tenido en cuenta los lineamientos de la ley 9.688 y, en cambio, al agregar el Honorable Senado el último párrafo, que dice: «Sin embargo, el empleador principal podrá exonerarse de su responsabilidad si probare que el contratista o subcontratista ha cumplido regularmente durante un período continuado de tres años anteriores al despido sus obligaciones impositivas y previsionales de empresario», se exonera de responsabilidad al empleador.

De esa manera se tiende a hacer ilusoria la garantía que ofrece la sanción originaria de este cuerpo, ya que hay contratistas que tratan por todos los medios de burlar las obligaciones emergentes del contrato de trabajo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Hardoy.

Sr. Hardoy. — Señor presidente: considero equivocado el criterio de la comisión. Es normal y lógico, justo y razonable, que el empresario responda por sus propias obligaciones, es decir, de las que derivan del contrato de trabajo celebrado con sus trabajadores. En cambio, debe ser interpretada con un criterio restrictivo la posibilidad de que se le añadan responsabilidades que no le incumben, como una mera eventualidad de que el contratista sea un insolvente o un prestanombres y sirva, en definitiva, de instrumento al empresario principal para burlar sus obligaciones con los trabajadores. Esta posibilidad desaparece con la buena previsión del Honorable Senado, según la cual el empleador principal puede exonerarse de su responsabilidad si probare que el contratista o subcontratista han cumplido regularmente durante un período continuado de tres años sus obligaciones impositivas y de carácter previsional. Con ello se demostraría que el contratista o subcontratista es real, con solvencia y responsabilidad.

No es del caso añadir al empresario principal la responsabilidad que puede adquirir con el contratista o subcontratista. Eso es injusto

e inconveniente porque va a obligar a incrementar reservas y precios, con lo que contribuirá, en definitiva, al aumento del costo de la vida.

Por todo esto, y teniendo en cuenta que éstas no son obligaciones propias y naturales del empresario principal, y que estamos tratando el caso de que el empresario se valga de contratistas inexistentes o insolventes, nuestro sector va a aceptar la enmienda del Honorable Senado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Señor presidente: el Senado ha introducido dos modificaciones en el artículo que la Cámara considera. Por la primera, limita la responsabilidad del empleador principal a aquellas obligaciones laborales que el contratista contraiga con los trabajadores a sus órdenes en el período en que ha realizado tareas o trabajos para el empleador principal. Con esas interpretaciones la comisión está de acuerdo y hubiera aceptado el primer párrafo modificado por el Senado en cuanto dice: «...que se originen durante el tiempo que estos últimos realicen trabajos para el empleador principal y con relación a los trabajadores utilizados por los contratistas o subcontratistas a ese fin». Y al final del artículo se agrega: «Sin embargo, el empleador principal podrá exonerarse de su responsabilidad si probare que el contratista o subcontratista han cumplido regularmente, durante un período continuado de tres años anteriores al despido, sus obligaciones impositivas y previsionales de empresario.»

La comisión ha entendido que no es precisamente el cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales lo que garantiza que el contratista o subcontratista han de cumplir también con las obligaciones laborales. Estamos refiriéndonos a planos distintos. En consecuencia, exonerar al empleador principal de su responsabilidad subsidiaria en este supuesto, nos ha parecido excesivo y no daba ninguna garantía de desaparecer por esta vía los contratistas y subcontratistas irresponsables.

Por estas razones, y lamentando no poder aceptar la modificación a que me he referido en primer término, e interpretando el criterio de quienes redactaron el proyecto y el despacho, la comisión ha debido rechazar totalmente las modificaciones introducidas por el Senado.

Nada más.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Riso.

Sr. Riso. — A propósito de lo expresado por el señor diputado Pena, que debo entender lo hace en nombre de la comisión y va a servir como medio de interpretación auténtica del texto de este artículo, quiero hacer algunas observaciones a las expresiones vertidas por el señor diputado Hardoy.

El señor diputado Hardoy debe ubicarse, como se ha ubicado el legislador común de esta

Cámara, en una de las dos tesituras: o parte del supuesto de que esta cláusula se establece para evitar que el contratista principal se valga de prestanombres o de «hombres de paja», como ha sido dado en llamarlos en doctrina, para escabullir el cumplimiento de las obligaciones emergentes de los contratos de trabajo, o bien se ubica en la postura contraria, es decir, parte de la base de la seriedad del contratista principal, que no va a usar de esas artimañas para defraudar al obrero. Pero en cualquiera de los dos supuestos en que se ubique —y debe ubicarse en uno— entiendo que las ansiedades que este artículo le han despertado al señor diputado Hardoy están perfectamente satisfechas y contempladas.

Hay un principio que aquí puede aplicarse sencillamente y que el señor diputado Hardoy convendrá conmigo en que es el que va a dar solución a aquel empresario principal que tiene a su cargo, por esta transferencia de responsabilidades, la del subcontratista, y que es el siguiente. Si un subcontratista es insolvente y no cumple con sus obreros, el texto del artículo señala que debe demandar a ambos, es decir, que la falta de consignación de los dineros emergentes de la relación laboral entre el trabajador y el subcontratista, si no es depositada la suma de inmediato, lo hará responsable al empresario.

Pero yo le contesto al señor diputado Hardoy: si el empresario considera que está pagando lo que debió haber pagado el subcontratista, tiene el recurso de repetir ante aquél lo que pagó. Es muy sencillo; la propia ley establece el sistema por vía de repetición. En todo caso, que sea el empresario que se equivocó al elegir el contratista quien vaya a buscarlo para que lo resarza de los perjuicios que la reclamación del obrero le provoca, obrero que, por otra parte, benefició con su esfuerzo impago a ese empresario. Para concluir: estimo que, de surgir un perjuicio por la insolventia del subcontratista, es menos injusto que lo soporte el patrón.

Sr. Hardoy. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Hardoy, para una aclaración.

Sr. Hardoy. — Simplemente, para hacer notar que cuando me he referido al caso de la insolventia, ha sido para la situación en que fuera insolvente antes de ser elegido por el contratista principal. Lo que no es justo es hacerlo responder al contratista principal de la insolventia posterior. No hay que olvidarse que el contratista principal lo eligió al subcontratista para ciertos fines, pero también el trabajador contrató con el subcontratista. No en todos los casos el contratista principal tiene que ser responsable; con ese criterio tendría que pagar las deudas de todo carácter del subcontratista.

Este es un caso excepcional y único: lo que se quiere penar es la mala fe o la imprevisión del contratista cuando no averiguó si el subcontratista tenía solvencia y buena fe. Pero cuando lo hizo y encontró, por ejemplo, que cumplía con sus obligaciones previsionales y con las demás que prevé el despacho del Honorable Senado, no se le puede cargar también con semejantes responsabilidades.

Además, aquí añadimos una responsabilidad que no existía, y eso es una innovación de la ley. Seamos prudentes; es muy posible que en la práctica, con el régimen que establece el Honorable Senado no ocurra nada malo. Me parece que en vez de avanzar demasiado y afectar aún más la economía de las empresas, es mejor que aceptemos este criterio, que me parece razonable y justo, de la enmienda del Honorable Senado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el despacho de la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Secretario (Oliver). — Los artículos 33 y 34 no han sido modificados.

Para el caso del artículo 35 la comisión aconseja aceptar la modificación introducida por el Honorable Senado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el despacho de la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Secretario (Oliver). — En el artículo 36, la comisión aconseja desechar la modificación propuesta por el Honorable Senado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Castellanos.

Sr. Castellanos. — Los motivos que se tuvieron para rechazar la modificación del Honorable Senado —dice el artículo, de acuerdo con esa modificación, que el trabajador sometido a proceso penal por hechos presuntamente sancionados..., etcétera— están dados por la circunstancia de que el término «presuntamente» dio motivo a que se produjera anteriormente un esclarecedor debate, en el que intervinieron varios señores diputados, entre ellos el señor diputado Natiello; después de aquel debate, con acuerdo general, se suprimió en esta Cámara ese término, que figuraba en el despacho original.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Natiello.

Sr. Natiello. — Señor presidente: además de los argumentos dados en forma abundante en aquella oportunidad, todavía resta, frente a la renuencia contumaz del Honorable Senado, una consideración que resulta graciosa. Esto: porque «los hechos presuntamente sancionados» por el Código Penal no son, por cierto, delitos, sino presuntos delitos, es decir, que serían presuntos hurtos, presuntos robos o presuntos homicidios.

Por ejemplo, si en la calle se me suscita una cuestión con un individuo, le pego una cachetada y en ese instante se le produce un síncope y muere, indudablemente habrá allí material para considerar que eso es *prima facie* un homicidio, que por lo general la policía califica como presunto homicidio.

Redactada como está la cláusula, habría que aplicarla a las personas que cometan presuntos delitos, no a las personas que cometan delitos, es decir, los hechos típicos que configuran delitos. Por eso, la consideración chistosa consiste en que el texto del Senado se limita a una figura curiosa, atípica, del Código Penal, que son los presuntos delitos.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el despacho de la comisión.

—Resultado afirmativa.

Sr. Secretario (Oliver). — El artículo 37 ha sido modificado por el Honorable Senado, y la comisión aconseja desechar la modificación.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Castellanos.

Sr. Castellanos. — No se aceptan las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en virtud de que el espíritu que guió la redacción de este artículo fue el que surge del plenario número 88 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Igualmente, se han tenido presentes las consideraciones que paso a enunciar. En primer lugar, el agregado final no hace más que repetir un principio general, en cuanto dice que si el trabajador en el período de huelga cometiese actos que configurasen una injuria hacia el empleador, podrá ser despedido sin derecho a indemnización. Pero el Honorable Senado ubica mal la cláusula y da a la redacción un sentido agresivo.

En segundo término, al hablar de la «asociación profesional reconocida», el Honorable Senado hace referencia, sin duda alguna, a la agremiación o asociación que goza de personería gremial, limitando de este modo los alcances del artículo.

En tercer lugar, al eliminarse la referencia a la declaración administrativa de ilegalidad, que contenía el artículo 37, deja librada a la interpretación judicial la posibilidad de que se desarrolle una instancia previa sobre quién califica en primer lugar la legalidad o la ilegalidad de la huelga, si es el ministerio competente o el propio juzgado, problemas éstos que fueron eliminados al sancionarse el artículo 37, ya que, según surge de esta disposición, aun mediando la declaración administrativa de ilegalidad, el empleador no podrá despedir a los obreros, como expresa el mencionado artículo.

Por otra parte, la referencia a las injurias cometidas por los trabajadores durante el período de huelga no significa que ellas quedan

impunes. Lo que se deja aclarado por esta comisión es que la mera participación en la huelga no es injuria a los efectos del despido.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Risso.

Sr. Risso. — Señor presidente: ante las atinadas razones enunciadas por el señor miembro informante del despacho de la mayoría y con el ánimo de no cansar a la Honorable Cámara, doy por reproducidos en esta instancia los razonamientos que sobre este artículo expuse en oportunidad del tratamiento en general del despacho.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Hardoy.

Sr. Hardoy. — Señor presidente: mi sector va a aceptar la enmienda propuesta por el Honorable Senado, dándole la interpretación de que mantiene para los jueces la atribución de examinar en cada caso cómo se ha ejercido el derecho de huelga. Nuestra Constitución no admite los derechos absolutos; todos son medidos por los jueces y comparados con las otras garantías y derechos que la misma ley fundamental acuerda. No puede haber excepción en ningún caso, porque ello significaría desnaturalizar el sistema constitucional que nos rige.

Además, éste es el criterio que invariablemente ha mantenido la Corte Suprema de Justicia, específicamente en el caso del ejercicio del derecho de huelga. Así ha ocurrido en los conocidos casos de Vázquez, Alejandro, contra el Banco Hipotecario Nacional del 9 de agosto de 1961; Duarte, Juan P., contra Banco Río de la Plata del 4 de octubre de 1961; Beneduce, Carmen J. y otras, contra Casa, Augusto, del 19 de diciembre de 1961; Díaz, Miguel A., y otro, contra Angel Risso y Compañía del 15 de octubre de 1962; Gatti, Alvaro J. C., contra Destilerías, Bodegas y Viñedos El Globo Limitada Sociedad Anónima, del 7 de diciembre de 1962.

Es verdad que la Cámara Nacional del Trabajo tuvo una jurisprudencia contraria, pero también es cierto que la modificó últimamente —a mi juicio, por lo menos— y se inclinó ante la buena doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Esta es la situación actual que debe ser contemplada por la Honorable Cámara al sancionar el artículo en consideración. No podemos sentar semejante precedente. Estamos de acuerdo en que no puede entregarse a la autoridad administrativa la última palabra en la materia, ni puede ser el poder administrador el que exclusivamente decida sobre la legalidad o ilegalidad de una huelga. Pero no puede quitarse a los tribunales, que lo van a rescatar y ejercer en cualquier caso, el derecho de examinar el fondo del asunto. La huelga afecta no solamente a los trabajadores, sino también a los empresarios y muchas veces, principal-

mente, a los superiores intereses de la colectividad, sobre todo en el caso de los servicios públicos.

Llamo la atención a los señores diputados de la primera minoría, porque esto significará quitar al gobierno de la Nación y a las autoridades judiciales el derecho de actuar en el caso de una interrupción de los servicios públicos. Si se sanciona el artículo con este alcance, puede producirse una huelga de Luz y Fuerza que nos deje sin luz, desaparecer los servicios hospitalarios, producirse incluso la desaparición de la fuerza pública que garantice el orden. Correrán los amparos y el Poder Ejecutivo no podrá tomar medidas disciplinarias ni dar garantías mínimas a la población. No puede ser que se establezca —y pido excusas a la Honorable Cámara si estoy en un error— que el derecho de huelga es absoluto y que solamente puede ser medida por la asociación profesional que lo declara. Bastará que una asociación profesional reconocida decrete una huelga para que nadie pueda discutir sus efectos. Nadie podrá, en defensa de los intereses superiores de la colectividad, tomar medidas que aseguren, llegado el caso, una convivencia civilizada.

Por eso pido respetuosamente al señor presidente de la comisión que aclare cuál es la interpretación auténtica de esta disposición. No hacemos cuestión de que se apruebe el texto propuesto por el Honorable Senado o el de la Cámara de Diputados; lo que interesa es una interpretación auténtica que resguarde los derechos fundamentales.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Señor presidente: pareciera que en la interpretación de este artículo fuera común la confusión.

La sanción originaria de Diputados no pretende reglar el derecho de huelga, ni afirma que se trate de un derecho absoluto —que no los hay— sino simplemente establecer cuáles son las consecuencias de la huelga decretada por una asociación profesional reconocida con relación al contrato individual del trabajo, estableciendo que este hecho de la huelga no tiene influencia alguna en la relación individual laboral, es decir, que no puede ser causa para el despido del trabajador.

En consecuencia, no hablamos de derechos absolutos ni pretendemos reglar la huelga. Este no sería el instrumento adecuado para hacerlo. Simplemente, establecemos las consecuencias de la huelga sobre la relación individual de trabajo.

No se ha aceptado la modificación introducida por el Senado, sobre todo con relación al segundo párrafo, que dice: «Si el trabajador, en el período de huelga, cometiere actos que configuren una injuria hacia su empleador, podrá ser despedido sin derecho a indemnización», por cuanto esta modificación traería como con-

secuencia la confusión de dos planos distintos del derecho laboral, es decir, el plano del derecho colectivo, que es donde se desenvuelve la huelga —y en el que los protagonistas son, por un lado, la asociación profesional con personería gremial o reconocida y, por el otro, el empleador, empleadores o entidad que los agrupa—, y el plano individual donde juegan las dos partes vinculadas por la relación laboral.

Hemos considerado que es inconveniente referirse en este mismo artículo a la injuria que puede autorizar al empleador a despedir al obrero sin obligación de indemnizarlo. Por otra parte, este tipo de injurias está legislado en detalle en el artículo 39 del proyecto que consideramos.

Estas son las razones que han movido a la comisión a mantener la sanción original de este cuerpo.

Sr. Hardoy. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Para una aclaración, tiene la palabra el señor diputado Hardoy.

Sr. Hardoy. — Quiero pedir muy concretamente al señor presidente de la comisión, para aclarar más el pensamiento, y a fin de que se entienda bien el texto que vamos a adoptar, que informe a la Cámara si, en caso de ser aprobada la redacción que sostiene la comisión, ello implicaría contrariar lo que sostuvo la Corte Suprema en los autos «Duarte, Juan P. y otros contra Banco Río de la Plata», el 4 de octubre de 1961: «El derecho de huelga no es absoluto ni excluyente de los demás derechos que consagra la Constitución Nacional. Sólo su ejercicio legítimo puede ser obstáculo para la ruptura válida del vínculo laboral por parte del empleador.»

Sr. Pena. — Creo que el señor diputado Hardoy se ha referido, en un solo párrafo, a dos aspectos distintos.

En alguna medida esto implica modificar el criterio de la Corte —hay que admitirlo— en cuanto establecemos con claridad que la huelga como hecho no debe tener ninguna influencia en la relación individual de trabajo. Pero esto no significa —como el señor diputado parecería sacar en conclusión— establecer que la huelga es un derecho absoluto.

Sr. Hardoy. — Confieso que no entiendo bien. Deseo saber concretamente si esta ley contraría en alguna medida esta doctrina de la Corte.

Sr. Pena. — No sé si abuso de la paciencia de esta Cámara al repetir que creo haber expresado con claridad que, en un aspecto, sí, implica contrariar la tesis de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto se establece que la realización de una huelga decretada por una asociación profesional con personería gremial o reconocida —como dice el artículo —no tendrá ninguna influencia en la relación individual de trabajo.

La relación de la huelga se establece entre la asociación profesional y el empleador, grupo de

empleadores o entidad que los represente, y no debe tener ninguna influencia frente al contrato individual de trabajo. En ese aspecto, sí, no concuerda con la doctrina de la Corte Suprema, pero si concuerda en cuanto no admitimos la existencia de la huelga como derecho absoluto.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado García Solá.

Sr. García Solá. — Señor presidente: vamos a votar por el despacho de la comisión. Es decir que vamos a votar en contra de la eliminación que ha hecho el Senado, en cuanto el primitivo despacho de la Cámara de Diputados no autoriza el despido mediando la declaración de ilegalidad de la huelga. Pero queremos precisar el sentido de nuestro voto.

Vamos a votar por el primitivo despacho de la Honorable Cámara porque creemos que es congruente con la doctrina de la Corte Suprema, que rectifica la doctrina anterior referida a la irreversibilidad de la calificación administrativa y que determina que la huelga debe ser calificada en sede judicial. Pero el sentido de nuestro voto no significa conferirle mucha importancia a esta declaración, que creemos bastante lírica, porque si bien la Corte ha dicho que la huelga debe o puede recalificarse en sede judicial, sólo esa recalificación es procedente ante la manifestación irracionalidad de la calificación administrativa. Y esta calificación administrativa, si bien desde antiguo se ha dicho que la huelga solamente suspende el contrato de trabajo, tiene por efecto hacer nuevamente exigibles las prestaciones mutuas del contrato de trabajo. Luego, cuando en el artículo 39, el inciso e) del apartado 3º autoriza el despido por abandono del trabajo mediando la previa intimación al reintegro, por el juego de estos dos artículos la huelga ilegal, así calificada, incide el contrato individual provocando el despido.

En definitiva, esta declaración es bastante lírica, casi una declaración; la votamos solamente porque es congruente con la doctrina de la Corte. Y aún se hace más lírica, una pura declamación, con la restricción que acaba de imponer al derecho de huelga la reglamentación de la ley de asociaciones profesionales. Este es el sentido de nuestro voto.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Fernández.

Sr. Fernández. — Señor presidente: es indudable que son totalmente distintos los conceptos que sobre el derecho de huelga tienen los partidos de Centro y la Unión Cívica Radical. Son diametralmente opuestos.

Este concepto fue fijado por nuestro partido con toda claridad y precisión —yo agregaría que también con valentía— en la Convención de Constituyentes de 1957. El constituyente Carlos A. Bravo, informando en nombre de la comisión sobre el derecho de huelga, manifestó conceptos que me voy a permitir leer porque son suficien-

temente claros y definitivos de la posición que tuvo y tiene la Unión Cívica Radical del Pueblo con respecto al derecho de huelga.

En esa oportunidad dijo Carlos A. Bravo: «Al incluirlo entre los derechos del gremio, tomado éste en el concepto de que se pertenece al mismo por razón del trabajo o de la ocupación, es decir, por el modo de vivir y no por el hecho de la agremiación o inscripción en los registros de una sociedad profesional, esta comisión fija claramente el concepto de que por su naturaleza pertenece a los derechos colectivos. Es del gremio, de los trabajadores. Como derecho no en absoluto, pues no existen derechos ilimitados y, por consiguiente, debe tener un límite que depende del concepto que, con respecto al derecho en sí, se tenga en cuanto al sujeto, en cuanto a los fines y en cuanto a los medios.

»En cuanto al sujeto, puede ser ejercido por trabajadores del gremio, estén o no afiliados a los sindicatos; basta que lo resuelva una pluralidad de trabajadores decidiéndolo libremente, aunque sean sólo los integrantes de un solo establecimiento o sección del establecimiento. No es un derecho del sindicato ni de la asociación; no tiene necesidad siquiera de ser homologado por los representantes del sindicato. Nos separamos expresamente de aquella legislación que exige que sea el sindicato o votaciones prácticamente imposibles de obtener en la práctica.

»Otra limitación es la que se exige comúnmente a los trabajadores y funcionarios de los servicios públicos, a quienes se niega terminantemente el derecho de huelga. Los trabajadores de servicios públicos, en la inteligencia de los miembros integrantes de la comisión, gozan del derecho de huelga y sólo están excluidos, siguiendo los pasos de lo aconsejado por la Organización Internacional del Trabajo, los funcionarios públicos depositarios de cierta parte de la autoridad pública y no los agentes administrativos o ejecutivos que disfrutan de un simple contrato de derecho privado.

»En cuanto a la limitación de sus funciones, la huelga debe tener por finalidad la defensa de los intereses de los trabajadores en conflicto con las patronales o con el Estado mismo, según los casos. Esta definición podría hacer incurrir en error, por creerse que están proscritas las huelgas de solidaridad, pero no puede negarse que en estas últimas existe un interés, si bien no profesional, sí mediato o indirecto, y por lo tanto los trabajadores argentinos deben tener, al reglamentarse el derecho de huelga en la legislación futura, el derecho a declarar la huelga por solidaridad con sus hermanos que también luchan.

»En cuanto a la limitación en los medios, como es por todos conocido, no necesito abundar en declaraciones. Las huelgas deben desenvolverse en un marco ajeno a toda violencia o depredación. En Puerto Rico se ha llegado a establecer piquetes cuando éstos actúan pací-

ficamente. Desde el punto de vista individual —hago estas apreciaciones a título personal pues no estoy autorizado por mis compañeros: creo que deben admitirse los piquetes en las reglamentaciones futuras cuando actúan pacíficamente— debe permitirse que los hombres se acerquen a conversar con sus compañeros para declarar la huelga de solidaridad.

»La huelga consiste en la suspensión del trabajo y de los contratos y no en la ruptura de los mismos. Al reglamentarse el derecho de huelga, los legisladores del futuro no deben entrar a considerar los aspectos de la licitud o ilicitud del conflicto por ser ello ajeno al derecho mismo. Como derecho gremial, no puede ser objeto de sanciones ni por vía administrativa, ni judicial, ni tampoco colectiva o individualmente.»

Y termina el ex constituyente Carlos A. Bravo: «El Código Penal, en su artículo 158, establece que será reprimido con prisión de un mes a un año el obrero que ejerciera violencia sobre otro para compelerlo a tomar parte de una huelga», a contrario sensu, no habiendo actos de violencia, los obreros no deben ser sancionados».

Este es el pensamiento radical sostenido en la Convención Constituyente y somos consecuentes con él. Ya he dicho ayer que éste es un derecho que no puede ser retaceado; en mi concepto, ni siquiera puede ser reglamentado y debe equiparárselo al de la libertad de prensa. Repito, con la libertad de prensa: cuando el derecho de escribir en la prensa es reglamentado, se enerva, se cercena el derecho de libertad de prensa y desaparece la libertad.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Jofré.

Sr. Ferreira. — ¿Me permite una breve interrupción, señor diputado Jofré.

Sr. Jofré. — Sí, señor diputado.

Sr. Ferreira. — Agradezco al señor diputado me conceda una interrupción, que en realidad iba dirigida al señor diputado Fernández —que no me la ha dado—, a quien de todas maneras le formulo esta pregunta concreta: ¿cómo concilia el señor diputado la doctrina del radicalismo del pueblo que acaba de exponer y la que admite —según ha dicho— hasta la actuación de los piquetes de huelga en caso de conflictos gremiales, con la decisión del Poder Ejecutivo de llevar a prisión a obreros y empleados de Aerolíneas Argentinas e incluso de ocupar militarmente el aeroparque de la ciudad de Buenos Aires a fin de no dejar actuar a los piquetes de huelga del personal de la empresa estatal que está en conflicto actualmente?

Sr. Presidente (Mor Roig). — Está en el uso de la palabra el señor diputado Jofré.

Sr. Jofré. — Me sorprende la amplitud que el señor diputado Fernández le da al derecho de huelga, cuando en ningún país del mundo se

acepta un criterio tan absoluto. Creo que todos debemos reconocer el derecho de huelga, y digo todos porque cuando en la Convención de Santa Fe se propuso el artículo 14 bis, nuestro bloque, que yo integraba en esa oportunidad, lo votó aceptando ese derecho, que es indiscutible.

Pero sin duda ninguna ese artículo 14 bis está relacionado con todo el texto constitucional, y sabemos por principio que todos los derechos que consagra la Constitución están sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio. Y el derecho de huelga, como el derecho de propiedad, como el derecho de reunión, como el derecho de expresar las ideas por la prensa, como cualquier derecho, está sujeto a la reglamentación que oportunamente puede y debe dictar el Congreso. No se trata de un derecho absoluto que, como acaba de expresar el señor diputado Fernández, no se puede reglamentar. Creo que sería absurdo si nosotros declaráramos en el Congreso que no podemos reglamentar un derecho.

Es decir que el bloque de la mayoría acepta que un gremio cualquiera declare una huelga política o una huelga de carácter revolucionario, las que tendrían el mismo valor que una huelga que puede decretar un gremio frente al incumplimiento de leyes obreras o frente a la negación de mejoras salariales. Creo que de ninguna manera puede sentarse una tesis de esa índole porque significaría la negación del derecho de poder gobernar o administrar como corresponde a un país, y porque estaríamos sujetos a los vaivenes de los deseos de determinados sindicatos o de partidos políticos que puedan escudarse en los sindicatos para perseguir sus fines o perturbar la marcha de la Nación.

Creo que en ese sentido el partido gobernante tiene que ser cauto y actuar con sentido de gobierno. No podemos sentar esta tesis, porque en el día de mañana un sector determinado, o un gremio, o un grupo de gremios, pueden declarar una huelga de carácter político —de tinte comunista, para ser más claro—, y entonces no sería posible tomar ninguna medida porque ya se ha sancionado esta norma o, con el criterio que expresa el señor diputado Fernández, se ha interpretado que derechos como el de huelga son absolutos.

Sr. Fernández. — No es ése el sentido...

Sr. Jofré. — Yo he escuchado al señor diputado con todo interés, y le pido que me escuche con la misma paciencia y serenidad.

Creo que es mucho más acertado el criterio del Honorable Senado, que establece ciertas facultades con respecto a quién tiene que calificar la huelga, cosa que no puede dejarse en manos del mismo gremio sino que debe tratarse de algún poder. En este caso sería el judicial el que determinaría si la huelga ha sido justa o injusta.

Sr. Risso. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Jofré. — Voy a hablar muy poco tiempo más, señor diputado; le ruego me escuche. Después tendrá oportunidad de contestarme. Terminó con este párrafo.

Quiere decir, entonces, que no podemos dejar flotando en el ambiente esas manifestaciones que se han formulado en el sentido de que el derecho de huelga es absoluto, y que es como el derecho divino de hacer todo lo que se crea conveniente. No puede ser. Este derecho de huelga puede y debe ser reglamentado. La huelga será aceptable siempre que se haga con un criterio gremial, pero no cuando se efectúe con propósitos políticos o bastardos.

Hemos visto en nuestro país...

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Jofré. — No agravio a nadie, de modo que pido que no se me interprete equivocadamente. No deseo perturbar la calma que debe existir en este recinto. Pero sí digo que puede ocurrir —y nadie se sienta molesto porque a lo mejor el caso a que me refiero se produzca contra sus intereses— que se declare una huelga con propósitos bastardos, como, por ejemplo, el de causar una perturbación de tipo revolucionario. Ya se ha señalado aquí que hubo varias tentativas en ese sentido. En el día de mañana una huelga se puede vincular con actos subversivos, con fines que no son los simplemente gremiales. En ese caso, ¿qué defensa tiene el poder administrador o el mismo empleador frente a una huelga en que se entra a su fábrica, se detiene a sus directores, se los lesiona y se destruye el establecimiento? ¿Acaso quiere decirse que nadie va a poder calificar esa huelga? ¿Qué puede ocurrir si, como en Tucumán, se secuestra a funcionarios públicos? Y en estos momentos no sabemos si el mismo subsecretario del Interior ha sido también secuestrado.

Sr. Castellanos. — Pero eso no es una huelga.

Sr. Jofré. — No se trata de una huelga pero puede tener vinculaciones con huelgas.

¿Acaso cuando el famoso plan de lucha no se tomaron fábricas y también se declararon huelgas? En ese entonces se secuestró a dirigentes que estaban actuando dentro de sus funciones. ¿Cómo no va a haber nadie que pueda calificar todo esto y decir que no corresponde? ¿Hay derecho o no a despedir a una persona que acepta una huelga de esta naturaleza? ¿Puede aceptarse que un obrero sea obligado por parte de dirigentes de sindicatos —que a veces no actúan con sentido gremial sino político— a ir a una huelga? Y si a su vez el obrero, llevado por ese impulso, comete actos que no son los que corresponden, ¿no se lo puede despedir?

Dejo planteados estos interrogantes especialmente al sector de la mayoría, que es el que en este momento tiene la enorme responsabilidad de la pacificación en todo el país.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Niembro.

Sr. Niembro. — Deseaba simplemente, tomando las palabras del diputado Fernández, señalar que apruebo con toda amplitud esas manifestaciones que son la base del programa y de la acción de la Unión Cívica Radical del Pueblo en la medida que fueran las auténticas y las que realmente se aplicaran.

Es evidente que en el año 1957 la Unión Cívica Radical del Pueblo no era gobierno, y deseaba llegar a él; en consecuencia, tenía una apreciación particular y muy amplia del derecho de huelga, como yo considero que debe ser este derecho. En consecuencia, la creación de los piquetes no es una invención ni una sorpresa salida de la Convención de Santa Fe...

Sr. Fernández. — Si me permite una interrupción el señor diputado...

Lo relativo a los piquetes era una opinión personal del ex constituyente Bravo. Yo lo he aclarado así, señor diputado, y lo dijo el mismo constituyente.

Sr. Niembro. — Como el señor diputado hizo suyas las expresiones del diputado constituyente Bravo, tengo que tomarlas como una manifestación de su posición personal y, como consecuencia, de la posición del sector que representa.

Los piquetes no son una innovación de la Convención de Santa Fe. En todos los países del mundo se permite la integración de piquetes con las finalidades que el señor diputado ha señalado, es decir, para convencer a los trabajadores de una empresa o de un taller, o a una parte de esos trabajadores, de que se plieguen a una huelga que la mayoría considera que debe hacerse, en razón de la justicia de las reclamaciones.

Lo que sucede en nuestro país es que las cosas se dan de distinta manera porque la realidad choca con los enunciados. Son muy bellas las palabras y muy aceptables las intenciones, pero no ocurre lo mismo con los hechos. Ayer tuvimos una manifestación pacífica de maestros en huelga que recorrieron las calles de Buenos Aires y se situaron frente al edificio del Congreso, en la creencia de que esta Honorable Cámara iba a considerar su problema a través de una interpelación al señor ministro de Educación. Estaban interesados en conocer la opinión de los legisladores y la del señor ministro del ramo. Pero, ¿qué les sucedió a esos pacíficos ciudadanos que venían con esa intención? Evidentemente, no se les permitió esa manifestación de voluntad de estar presentes y fueron agredidos por la policía e incluso algunos privados de libertad.

En Aerolíneas ha sucedido lo mismo. Además, tendríamos que haber planteado como un reclamo y un imperativo de conciencia la situación por la que atraviesa la provincia de

Tucumán. Todo esto configura un estado social que el señor diputado ha querido vincular con el programa de la Unión Cívica Radical, que significaría realmente la pacificación de los espíritus por el respeto que cada una de las fuerzas integrantes de la comunidad nacional debe tener garantizado.

Sin embargo, como ya he dicho, una cosa son las palabras y otra muy distinta son los hechos y las actitudes que se toman en contra de los sectores del trabajo. Nosotros hablamos del respeto al derecho de huelga y afirmamos que la huelga no es un derecho que se otorgue a nadie, sino un derecho natural que ejercen quienes la ejecutan. La huelga se produce cuando se dan circunstancias muy especiales, ya sea porque los empresarios —como dijo el señor diputado por Mendoza— no aceptan la modificación de las tablas salariales, o bien porque no se cumplen disposiciones legales o convencionales. En nuestro país, sobre todo en los últimos años, ha sido calificado como huelga política cada uno de los movimientos que han iniciado los trabajadores. Con toda cordialidad, porque quiero mantener este ambiente de tranquilidad que reina en el recinto, quisiera que se me señalara un solo caso en que una organización gremial se haya movilizadado por razones que no tuvieran una raíz gremial o que no fueran una consecuencia de un hecho cometido en contra de los intereses de los trabajadores.

Sr. Jofré. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado?

Sr. Niembro. — Sí, señor diputado.

Sr. Jofré. — El señor diputado pide que se le señale un solo ejemplo de huelgas que no hayan tenido causas gremiales. Quiero recordar que justamente el año pasado, con motivo del plan de lucha, se declararon huelgas para propiciar la vuelta de Perón. Vale decir que con esto se demuestra que es una razón política.

Sr. Gallo. — Está muy mal informado el señor diputado.

Sr. Niembro. — Lamentablemente, el señor diputado no me ha podido dar un caso cierto de una acción de huelga política.

Sr. Jofré. — Habrá que decirles a los gremios que no digan cosas que no son ciertas, que no piensan.

Sr. Niembro. — No tendría tiempo para explicar nuevamente todo lo que significó la iniciación del plan de lucha. Ya se señaló esto aquí, con amplitud, en ocasión de la interpección al señor ministro de Trabajo y Seguridad Social.

De todas maneras, han quedado determinadas claramente sus motivaciones y basta con remitirse a los periódicos de la época y a los anteriores a la del plan de lucha para ver cuál fue la actitud de las organizaciones gremiales, de la Confederación General del Trabajo, la entidad madre de los trabajadores, que pro-

movieron incluso la participación de los partidos políticos en la consideración previa al lanzamiento del plan de lucha. Incluso fueron invitadas las fuerzas empresarias, se dialogó con ellas y estas mismas fuerzas fueron a requerir del Poder Ejecutivo las soluciones que consideraban debían dárseles a los trabajadores, que evidentemente no fueron tomadas en cuenta, por las razones que habrá tenido el Poder Ejecutivo en la oportunidad.

Antes de iniciarse el plan de lucha, la Confederación General del Trabajo hizo llegar al Congreso Nacional, y muy particularmente a esta Honorable Cámara de Diputados, el plan de peticiones que fuera elevado también al señor presidente de la Nación. Ante la falta de soluciones concretas a esos puntos concretos y no solamente esto, sino ante la falta de contestación, o consideración siquiera, evidentemente quedó el camino del plan de lucha.

Que el plan de lucha haya traído una nueva variante en la acción obrera en la Argentina, es un aspecto que puede ser discutido, porque cada uno de nosotros tenemos nuestro particular punto de vista; pero que eso era una acción política no es exacto.

Sr. Jofré. — Eso es lo que precisamente discuto. Una huelga que originariamente pudo haberse dispuesto con un propósito gremial puede ser desvirtuada hacia un propósito político y eso es lo que tenemos que procurar que no ocurra.

Sr. Niembro. — Considero que al sancionar la acción que realizan los trabajadores en una huelga se va más allá de lo que corresponde, si se tiene en cuenta que debe respetarse ese derecho que ha consagrado muy bien la Constitución Nacional y que en esta emergencia ha sido avalado por las magníficas palabras expuestas por el señor presidente del bloque radical del pueblo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Señor presidente: lamentablemente el debate ha salido de cauce. El artículo que estábamos considerando solamente pretende regular la influencia de la huelga, como derecho colectivo, en la relación individual de trabajo. Esta desviación nos obliga a formular algunas aclaraciones.

Ningún representante de este bloque ha admitido, ni en la comisión ni en este recinto, que existan derechos absolutos, y las palabras del señor diputado Fernández no fueron más que la simple lectura de algunas manifestaciones formuladas por un convencional de nuestro partido en la Convención Constituyente de 1957.

Sr. Ferreira. — Era la doctrina del partido.

Sr. Pena. — Lo sigue siendo; se lo voy a demostrar.

La huelga es, como todos saben y según la definición más aceptada, el abandono pacífico y concertado de los lugares de trabajo para ava-

lar una reclamación. El radicalismo sigue manteniendo su preocupación por satisfacer las reclamaciones legítimas de los trabajadores, y lo ha demostrado a través de la acción en este cuerpo. Las dos leyes más importantes que en materia laboral ha dictado el Congreso Nacional en los últimos tiempos han sido: una iniciativa del Poder Ejecutivo sobre salario mínimo vital y móvil, y otra por iniciativa de esta bancada, que es el proyecto que estamos tratando.

Se han hecho referencias a lo que está pasando en Tucumán pero no se dice que el gobierno está cumpliendo con la ley sancionada por el Congreso y su reglamentación. El problema que se ha planteado en los últimos días no es sino consecuencia de una medida seria y responsable, como es la de abonar en primer lugar a los cañeros de menores ingresos a los más necesitados y son precisamente los menos necesitados los que han provocado los últimos hechos en esa provincia.

Se ha dicho también que el decreto que dictó el Poder Ejecutivo y que fue motivo de una interpelación, en la que el señor ministro de Trabajo informó con amplitud y con responsabilidad, deroga u obstaculiza el derecho de huelga. Nada más incierto. Lo único que establece el artículo 8º es la obligación de que las asociaciones profesionales efectúen una consulta previa a sus afiliados para tomar medidas de acción directa. Es verdad, por otra parte, que en algunos casos, esgrimiendo aparentemente banderas de reclamaciones gremiales, se han decretado huelgas cuyas motivaciones reales eran de carácter político. Para qué lo vamos a negar si todos lo sabemos bien.

Sr. Niembro. — Diga una de ellas.

Sr. Pena. — El plan de lucha era un plan político.

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia solicita a los señores diputados se sirvan no dialogar.

Sr. Pena. — En el plan de lucha se esgrimieron fundamentalmente banderas y *slogans* políticos y hasta se habló del retorno imposible.

No nos desviemos del tema, ni entremos a analizar asuntos que no están relacionados con el artículo 37 del despacho. Para mí el problema es muy claro. La huelga no ejerce ninguna influencia en la relación laboral individual.

Sr. García Solá. — ¿Me permite una interrupción muy breve?

Sr. Pena. — Si el señor diputado me asegura que luego me ampliarán el término...

Sr. Presidente (Mor Roig). — No es posible porque el plazo de cinco minutos de que dispone el señor diputado es improrrogable.

Sr. Pena. — Decía, señor presidente, que la huelga no ejerce ninguna influencia en la rela-

ción laboral individual. Tal es lo que se desprende del artículo. Eso no significa, en manera alguna, que si el trabajador comete una injuria individualmente no pueda ser sancionado.

Esto está muy bien legislado, como señaló en su anterior intervención el señor diputado García Solá.

Sr. Jofré. — ¿Aunque se trate de una huelga revolucionaria?

Sr. Pena. — En el caso de huelgas que no se ajustan a reclamaciones gremiales, la responsabilidad es exclusiva de la asociación con personería gremial que la decretó. Algunos trabajadores, que pueden no estar de acuerdo con la huelga, se ven obligados a adherir al conflicto. y como consecuencia de ello podrían ser objeto de una sanción que afecte su relación laboral individual.

Con estas palabras creo que queda aclarado el problema y pido que volvamos a concentrarnos en el artículo en discusión, porque de lo contrario divagaríamos durante largo tiempo sobre puntos que no atañen a este debate.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Risso.

Sr. Risso. — Había pedido la palabra para manifestar algo parecido a lo expresado por el señor diputado Pena en su segunda intervención. Voy a dejar sin efecto mi participación en esta oportunidad para no desalentar el trabajo de la Honorable Cámara.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Romano.

Sr. Romano. — Al comienzo de su exposición el señor diputado Pena manifestó que este debate estaba saliendo de su curso, puesto que prácticamente se había apartado del artículo en discusión. A pesar de ello, el señor diputado Pena insistió en hacer apreciaciones que configuran tratar otras cuestiones que nada tienen que ver con el artículo 37.

Quiero dejar perfectamente aclaradas las manifestaciones que formulara, ya que en Tucumán la intranquilidad social actual es fruto exclusivo de la falta de aplicación de la ley de emergencia del azúcar, que el Congreso sancionara en el mes de diciembre último. En el momento propicio nuestro bloque pedirá que la Honorable Cámara se aboque a la discusión de por qué el Poder Ejecutivo, por intermedio de los organismos respectivos, no ha cumplido con la ley de emergencia del azúcar.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Alegre.

Sr. Alegre. — Yo también deseo señalar que el señor diputado Pena ha expresado que lo que estábamos discutiendo no estaba dentro del tema en debate, y efectivamente es así. Días pasados, cuando se discutió la reglamentación de la ley de asociaciones profesionales, me había anotado para aclarar algunos conceptos vertidos también por el señor diputado Pena.

El señor diputado insiste en la ley del salario vital, mínimo y móvil, y afirma que muchas huelgas y movimientos gremiales no se deben a hechos pura y exclusivamente gremiales, y no es así.

Sr. Pena. — Yo no he dicho eso.

Sr. Alegre. — El señor diputado ha dicho que muchas veces se hacen movimientos huelguísticos con fines políticos y señaló también, como lo hizo el diputado Ferreira, que similar al caso de aerolíneas, hay otros tantos. Yo sostengo que no se ha aplicado la ley del salario vital, mínimo y móvil. En los astilleros navales de Río Santiago, por ejemplo, muy a menudo son sacados por fuerzas de la Marina de Guerra los obreros que reclaman el pago del magro sueldo de ocho mil pesos mensuales. Me remito a hechos concretos, a los que se están entregando dos o cinco mil pesos a cuenta de ese magro salario. Allí también se dice con mucha ligereza que, como el gremio está enrolado en las 62 organizaciones, cuando saca a los obreros a la calle en defensa de sus intereses es con fines políticos. Y yo pregunto si reclamar que se paguen los ocho mil pesos mensuales que tienen asignados, y requerir con todo derecho la aplicación del salario vital, mínimo y móvil pueden considerarse fines políticos.

Cómo ha dicho el diputado Niembro, tenemos que terminar de una vez por todas con las declamaciones y aplicar realmente la ley de la cual tanta gala hacen algunos diputados oficialistas. Cuando los trabajadores salimos a la calle en un movimiento huelguista lo hacemos para defender nuestros legítimos derechos.

Quería significar esto, para aclarar que lo manifestado por el señor diputado Pena no se ajusta a la realidad.

Sr. Pena. — El señor diputado confunde las palabras.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado García Solá.

Sr. García Solá. — Es inexacto que este artículo regule la huelga como fenómeno colectivo. Este artículo trata la incidencia de la huelga en la suerte del contrato individual de trabajo. Es lírica la expresión de que no se puede despedir, mediante una declaración de ilegalidad de la huelga, porque por el artículo 39, inciso 3º, e), el patrón puede intimar al trabajador y después despedirlo. Solamente votamos este artículo para ser congruentes con la doctrina de la Corte, que ha admitido la revisión de la calificación en sede judicial, pero no le damos mayor importancia a esta declaración absolutamente vana.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Jofré.

Sr. Jofré. — Las expresiones del señor diputado Pena me confunden más todavía después de lo que había escuchado al señor diputado Fernández, porque dice que el derecho de huelga es absoluto...

Sr. Pena. — No es absoluto.

Sr. Jofré. — Primero el señor diputado Fernández así lo afirmó y después el señor diputado Pena nos dice que el derecho de huelga es tan definitivo —no usemos la palabra absoluto— que determina que basta con que la huelga haya sido decretada por un gremio para que no se pueda de ninguna manera despedir al obrero que se pliega a la misma. Vale decir que se deja en manos del gremio la posibilidad de que sea él exclusivamente el que determine el carácter de la huelga.

Yo voy a otra cosa: si el gremio, reconocido legalmente, con todas las garantías de la personería gremial, declara una huelga de tipo revolucionario, político o subversivo, no se puede despedir al obrero por el hecho de esa declaración. Vale decir que estamos dejando de lado un derecho indiscutible del Poder Judicial, o del poder administrador en su caso, cual es el de declarar la legitimidad o ilegitimidad de la huelga.

Supongamos, por ejemplo, que el gremio Luz y Fuerza declarara una huelga revolucionaria, a través de la entidad gremial reconocida, y dejara sin luz a todo el país. Con esta disposición resulta que ante ese caso no se puede tomar medida alguna porque la huelga ha sido decretada por el gremio.

Me parece que esto es absolutamente incongruente con el espíritu que se ha querido dar al artículo. Indudablemente, en el caso de una huelga común, el hecho de que el obrero se pliegue a la huelga no significa que se lo pueda despedir. Pero debemos tener alguna garantía para saber que la huelga está bien decretada y de que no tiene otro sentido que el realmente gremial. Debemos tener, en una palabra, las armas necesarias para defender al país, que es quien estará en peligro frente a leyes que, como ésta, se prestan a confusiones y a interpretaciones tan caprichosas como las que hemos escuchado en este recinto.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Natiello.

Sr. Natiello. — Señor presidente: quiero rectificar una apreciación de los diputados Jofré y Pena sobre el plan de lucha de la CGT. Ese plan de lucha fue suficientemente publicitado y expresado en doce puntos concretos, entre los cuales no figuraba el del retorno del coronel Perón.

Sr. Garófalo. — ¿Lo han bajado de grado? ¿No es que era general?

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Natiello. — En esos doce puntos no sólo se formulaban reclamaciones, sino que se daban soluciones. Pero estoy en condiciones de conceder que implícitamente, en ese plan de lucha, estaba el retorno del general Perón. Pero espero que con la misma honradez los señores diputados admitan que en cada pronunciamiento

electoral del pueblo argentino hay, tácitamente, un plebiscito en favor del regreso del general Perón.

Sr. Arias. — ¿Con un treinta por ciento de votos?

Sr. Natiello. — Respecto de ese retorno, la cuestión es muy sencilla. Un juez argentino pide la extradición; el ministro Zavala Ortiz oficia al gobierno de Madrid, y el 2 de diciembre de 1964 el ciudadano Juan Domingo Perón viene en avión a la Argentina...

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia ruega al señor diputado ceñirse al tema en debate.

Sr. Natiello. — El pánico se apodera entonces de la Casa de Gobierno, al extremo de mendigar en las cancillerías hermanas y en el Departamento de Estado...

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia indica al señor diputado que se está apartando evidentemente del tema en debate.

Sr. Natiello. — Pero la historia es muy simple...

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Natiello. — ...y los señores diputados la han traído a colación.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia exhorta entonces a los señores diputados a que se vuelva al cauce del debate.

Sr. Natiello. — Perfectamente, señor presidente.

Protestaré por otra cosa. El señor diputado Pena, que junto con mi querido amigo Carlos Bravo recibió la influencia señera de un hombre mentalmente sensible y de gran conducta privada y pública, desgraciadamente muerto —Crisólogo Larralde—, no puede decir, como lo ha hecho, que ésa era la opinión personal del constituyente Carlos Bravo. Entiendo que sí era la doctrina del partido radical, pero una cosa es esa doctrina y otra la *praxis* del gobierno radical, que el año pasado dictó el llamado «decreto García Tudero», número 4.973, que importa no sólo una reglamentación derogatoria de esa cláusula expresa de la Constitución Nacional que es el derecho de huelga, sino que llega hasta el enriquecimiento ilícito del Estado, al formular en una de sus cláusulas la premisa de que el paro dentro del lugar de trabajo por una hora de la jornada, por ejemplo, da lugar a que caiga el jornal entero del trabajador. Esa es una reglamentación del derecho de huelga que, evidentemente, está derogando el derecho constitucional.

Este artículo de la ley del contrato de trabajo regla el derecho de huelga constitucional en el aspecto del contrato de trabajo, sin duda alguna, porque no es exacta la tesis del señor diputado Fernández de que ese precepto no debe ser reglamentado. No, señores diputados; como cualquier artículo de la Constitución, y no obstante el carácter cuasi absoluto que le da en sus pa-

labras enfervorizadas mi querido amigo el ex diputado Carlos Bravo, no es un derecho absoluto y, por lo tanto, puede ser reglamentado por la ley; pero no puede ser derogado, como lo ha hecho los otros días el gobierno que, al reglamentar la ley de asociaciones profesionales, la ha derogado por esa vía que llamaríamos maquiuvelica. No se puede derogar una ley por vía de la reglamentación.

Después de la Constituyente de 1957, que estableció en el artículo 14 bis de la Constitución el derecho de huelga, el general Aramburu dicta un decreto anulando ese derecho por el término de cuarenta y cinco días, por cuanto allí se dice, lisa y llanamente, que durante ese término, y en razón de motivos de paz social ante la proximidad de las elecciones nacionales, no existe el derecho de huelga. Bueno, señores diputados... ya sabemos el respeto que tenía y tiene el general Aramburu por la Constitución.

Más tarde, una ley del gobierno de Frondizi reglamenta el derecho de huelga y lo anula cuando establece que tal derecho debe ejercitarse fuera de los lugares de trabajo y durante toda la jornada laboral, entre otras cosas.

Por eso, cuando este artículo se refiere a la huelga, la invocación debe ser amplia, comprendiendo a la huelga como todo caso de conflicto colectivo: el trabajo a código en los tribunales, el trabajo a reglamento, el trabajo a desgano, el paro horario; es decir, toda suerte de conflicto colectivo, dentro o fuera del lugar de trabajo.

Aquella era una limitación, por ley del gobierno de Frondizi, que reglamentaba el derecho de huelga pero que al mismo tiempo lo estaba limitando de tal manera que en la práctica resultaba una verdadera derogación.

Por fin, el gobierno radical dicta el año pasado ese decreto que los obreros conocen con el nombre de «decreto García Tudero». Y este instrumento es también, sin duda alguna, una limitación inadmisibles del derecho de huelga, a tal extremo que en la práctica resulta una derogación lisa y llana de ese derecho. Vuelvo, entonces, a repetir que una cosa es la doctrina radical y otra diferente la *praxis* del gobierno radical; inconsecuencia que demuestra que una cosa es la declamación y otra la pragmática.

Por último, deseo advertir que si el señor diputado Jofré se toma el trabajo de leer con todo el tiempo necesario el artículo, notará que es evidente que se está refiriendo a la huelga de tipo gremial, y es indudable que la suspensión del contrato de trabajo no impide que cualquier depredación de los obreros determine al patrón a despedirlos por haberse configurado la injuria, causal que se encuentra establecida no en el artículo que examinamos sino en otro posterior de esta ley reglamentaria del contrato de trabajo.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Rouzaut.

Sr. Rouzaut. — Señor presidente: con todo respeto digo que se me ocurre que se están confundiendo los alcances del artículo 37.

Se ha dicho aquí que el derecho de huelga es un derecho natural del hombre. Precisamente, ésa es la posición que ocupábamos en la Convención Constituyente de 1957, el entonces convencional doctor Alfredo Palacios y el que habla, cuando juntamente formamos parte de la Comisión de Derechos y Garantías de aquella Convención, a punto tal que sosteníamos que el derecho de huelga debía figurar en el artículo 14 de la Constitución, que reconoce los derechos naturales. Luego apareció como derecho de los gremios en el artículo 14 bis, pero recuerdo que en un magnífico discurso del doctor Palacios quedó aclarado que el derecho de huelga, así como el derecho de asociación —ya que aquél fundamentalmente radica en el derecho de asociarse con fines útiles para dejar de trabajar en un momento determinado, a los efectos de conseguir, por esa circunstancia del no trabajo, las aspiraciones legítimas de un conjunto de hombres—, es un derecho natural, lo cual fue aceptado por el convencional Bravo.

Por eso se acepta que es un derecho natural y por eso es que figura en el artículo 37 que el derecho de huelga no ha de incidir como tal, y mientras se ejercite como tal, en el contrato de trabajo. Esto no quiere decir que si se producen hechos de fuerza, que son los que fundamentaban algún decreto a que se ha referido el señor diputado Natiello, con consecuencias jurídicas, o si se trata de injurias al patrón, o si se trata de delitos cuando la huelga adquiere el carácter de revolucionaria, supuesto al que se ha referido el señor diputado Jofré, estas circunstancias no hayan de valorarse dentro de la generalidad con que deben valorarse tales hechos en el contrato de trabajo.

Queremos significar entonces que no hay que confundir las incidencias que el ejercicio del derecho de huelga puede tener en el contrato de trabajo con las otras circunstancias que, aplicando las normas comunes, pueden tener consecuencias en esa convención.

Me voy a referir a otra cuestión que he oído en este recinto y que puede tener algunas derivaciones. Una cosa es el ejercicio del derecho de huelga y otra los hechos que pueden tener relación con el ejercicio del poder de policía del Estado, cuando se realizan manifestaciones en la vía pública o en los bienes del dominio público. Nada tiene que hacer el ejercicio del derecho de huelga con aquellas otras manifestaciones que pueden alterar el orden público. La autoridad está obligada a mantener el orden público y manteniéndolo mantiene también el orden jurídico. Es un deber de la autoridad mantener el orden público en la vía pública y en los bienes del dominio público. Por eso, algunos ejemplos traídos aquí acerca de lo ocu-

rrido ayer, nada tienen que hacer con el ejercicio del derecho de huelga.

Por otra parte, quiero aclarar que el convencional Bravo jamás dijo en la Convención Constituyente de 1957 que el derecho de huelga fuera un derecho absoluto. Lejos de ello, dijo que «como derecho no era absoluto». El derecho de huelga puede ser reglamentado, pero debe ser considerado —lo repito— como un derecho natural que se fundamenta en el derecho de asociación con fines útiles. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a llamar para votar.

—Mientras se llama para votar:

Sr. De Cara. — ¿Cuántos señores diputados hay en la casa, señor presidente?

Sr. Presidente (Mor Roig). — En la casa hay 105 señores diputados.

Sr. De Cara. — Pido que se pase lista.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se procederá a pasar lista.

—Se pasa lista.

Sr. Presidente (Mor Roig). — La Presidencia informa que en estos momentos hay quórum estricto en el recinto.

Se va a votar el artículo 37 conforme al despacho de la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Secretario (Oliver). — El artículo 38 no ha sido modificado por el Honorable Senado.

El artículo 38 consta de varios puntos, incisos y subincisos. El Honorable Senado solamente ha introducido modificaciones parciales.

El inciso 1º no ha sido modificado.

En el punto A, inciso 2º, la comisión aconseja desechar las modificaciones introducidas por el Honorable Senado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Castellanos.

Sr. Castellanos. — Las modificaciones introducidas por el Honorable Senado hacen referencia a la sanción primigenia de la Honorable Cámara, que establecía: «Por renuncia: sólo se entenderá que es válida cuando se exteriorice mediante telegrama dirigido al empleador...» En cambio, la modificación del Honorable Senado determina: «Por renuncia: sólo se entenderá que es válida cuando se exteriorice mediante telegrama colacionado dirigido al empleador...» Además, en la última parte del inciso el Honorable Senado determina que la renuncia deberá ser realizada «con las formalidades establecidas por el artículo 3.639 del Código Civil».

La comisión no ha aceptado el temperamento ropuesto, en virtud de las consideraciones formuladas por el miembro informante de la co-

misión, señor diputado Pena, que figuran en la página 4830 del Diario de Sesiones del 27 de septiembre de 1965.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el despacho de la comisión.

— Resulta afirmativa.

Sr. Secretario (Oliver). — En el punto B) del mismo inciso 2º, la comisión aconseja aceptar las modificaciones introducidas por el Honorable Senado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

Sr. Secretario (Oliver). — En el inciso 3º, punto A), apartado e), la comisión aconseja aceptar las modificaciones introducidas por el Honorable Senado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

Sr. Secretario (Oliver). — En el punto B) del inciso 3º la comisión aconseja desechar las modificaciones introducidas por el Honorable Senado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

Sr. Secretario (Oliver). — En el punto C) del inciso 3º, la comisión aconseja desechar las modificaciones introducidas por el Honorable Senado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — Señor presidente: en la comunicación de la sanción originaria de esta Honorable Cámara al Honorable Senado se deslizó un error. El párrafo que comienza con las palabras «La indemnización no será superior...» equivale conceptualmente al párrafo siguiente que comienza: «Dicho promedio no podrá exceder...». Es decir que esta Cámara debería considerarlo inexistente o suprimido por cuanto no significa más que la repetición del mismo concepto con distinto texto.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Tiene la palabra el señor diputado Ferreira.

Sr. Ferreira. — ¿El texto que se va a corregir ahora ha sido objeto de modificación por parte del Senado?

Sr. Pena. — Sí, señor diputado.

Sr. Ferreira. — Porque si no, constitucionalmente no procedería considerarlo.

Sr. Pena. — El texto ha sido objeto de modificaciones pero la comisión no las acepta. No obstante eso, para evitar la repetición de dos textos que corresponden al mismo concepto y porque podrían traer confusión en su interpretación he formulado mi propuesta.

Sr. Ferreira. — Pero, ¿se modifica de algún modo la sanción originaria de esta Cámara?

Sr. Pena. — No, señor diputado.

Sr. Ferreira. — Muchas gracias.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar el despacho de la comisión con el sentido y alcance que va a aclararse por Secretaría.

Sr. Secretario (Oliver). — Se aceptaría la supresión del párrafo a que se ha referido el señor diputado Pena, y se desecharía la modificación efectuada por el Honorable Senado a la última parte del inciso.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

Sr. Secretario (Oliver). — Los incisos 4º y 5º del artículo 39 no han sido modificados. En cuanto al inciso 6º, la comisión aconseja aceptar la modificación del Honorable Senado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

Sr. Secretario (Oliver). — Los restantes incisos del artículo 39, es decir el 7º y el 8º, no han sido modificados.

El artículo 40 ha sido modificado por el Honorable Senado, y la comisión aconseja desechar la modificación.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

Sr. Secretario (Oliver). — El artículo 41 también ha sido modificado por el Honorable Senado y la comisión aconseja desechar tal modificación.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

Sr. Secretario (Oliver). — El artículo 42 no ha sufrido modificaciones.

El artículo 43 ha sido modificado, y la comisión aconseja desechar la modificación.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

Sr. Secretario (Oliver). — El artículo 44 también fue modificado, y la comisión aconseja desechar la modificación.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

Sr. Secretario (Oliver). — El artículo 45 no ha tenido modificación.

El artículo 46 ha sido modificado, y la comisión aconseja aceptar la modificación.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

Sr. Secretario (Oliver). — Los artículos 47 y 48 no han sido modificados.

En cuanto al artículo 49, la comisión aconseja desechar la modificación introducida por el Honorable Senado.

Sr. Presidente (Mor Roig). — Se va a votar.

— Resulta afirmativa.

Sr. Secretario (Oliver).— Los artículos 50, 51, 52, 53 y 54 no hay sido modificados.

Con respecto al artículo 55, la comisión aconseja aceptar la modificación introducida por el Senado.

Sr. Presidente (Mor Roig).— Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Secretario (Oliver).— El artículo 56 no ha sufrido modificación.

El artículo 57 ha sido modificado, y la comisión aconseja desechar tal modificación.

Sr. Presidente (Mor Roig).— Se va a votar.

—Resulta afirmativa.

Sr. Secretario (Oliver).— El artículo 58 no ha sido modificado, y el artículo 59 tampoco. El artículo 60 ha sido modificado, y la comisión aconseja desechar la modificación.

Sr. Presidente (Mor Roig).— Se va a votar el dictamen de la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Secretario (Oliver).— Los artículos 61, 62 y 63 de la sanción de la Honorable Cámara no han sido modificados.

Sr. Presidente (Mor Roig).— Queda sancionado el proyecto de ley (1).

Se comunicará al Honorable Senado.

3

MOCION

Sr. Presidente (Mor Roig).— Para una moción de orden, tiene la palabra el señor diputado Patlis.

Sr. Patlis.— Señor presidente: el inciso 10 del artículo 108 del reglamento autoriza a que, para la consideración de un asunto de urgencia o especial, la Cámara se aparte de las prescripciones reglamentarias.

He presentado en Secretaría un proyecto de declaración por el que la Honorable Cámara expresa que considera imprescindible que el Poder Ejecutivo de la Nación sancione con la máxima severidad a los responsables de los paros del servicio público de transportes de la Capital Federal, por significar un verdadero *lock out* patronal, en desmedro de los intereses y derechos de la población y un alzamiento contra el orden legal.

Los fundamentos que se agregan al proyecto de declaración son prácticamente copia de los de un proyecto de ley que con fecha 7 de julio de 1964 he presentado para punir con mayor gravedad este tipo de suspensión en la prestación de servicios públicos, *lock out* patronal que significa una violación de las obligaciones

que imponen los contratos y la práctica de las concesiones de servicios públicos.

Para argumentar en favor de la moción de orden que formulo...

Sr. Presidente (Mor Roig).— La Presidencia hace notar al señor diputado que el reglamento no admite discusión de las mociones a que se refiere el inciso 10 del artículo 108. Por lo tanto, lógicamente, la fundamentación debe ser muy sucinta.

Sr. Patlis.— Creo que la fundamentación es suficientemente sucinta.

Sr. Presidente (Mor Roig).— La Presidencia, simplemente, hacía notar esa circunstancia al señor diputado.

Sr. Patlis.— Deseaba que la Honorable Cámara tomara conocimiento de las razones por las cuales propongo el apartamiento de las prescripciones reglamentarias y el tratamiento sobre tablas del proyecto que he presentado.

Quiero señalar, simplemente, que la población de la Capital sufre, dramáticamente, ese problema.

Sr. Presidente (Mor Roig).— Corresponde votar la moción formulada por el señor diputado Patlis.

Sr. Ocampo.— Pido la palabra para solicitar una información.

Sr. Presidente (Mor Roig).— La Presidencia concede la palabra al señor diputado Ocampo al solo efecto de solicitar una información, porque la moción de orden formulada por el señor diputado Patlis es de las que no se discuten.

Sr. Ocampo.— Deseo se me informe si ha llegado a la mesa un proyecto que acabo de presentar junto con el señor diputado Selser, acerca del mismo asunto a que se ha referido el señor diputado Patlis.

Sr. Presidente (Mor Roig).— ¿El proyecto a que se refiere el señor diputado ha sido presentado en mesa de entradas, o directamente fue depositado en Secretaría?

Sr. Ocampo.— Ha sido presentado en mesa de entradas.

Sr. Presidente (Mor Roig).— Ese proyecto no ha llegado a la mesa porque los asuntos que se presentan por esa vía no se envían a la mesa de la Presidencia.

Sr. Ocampo.— Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Mor Roig).— Se va a llamar para votar.

—Mientras se llama para votar:

Sr. Niembro.— ¿Hay suficiente número de diputados en la casa, señor presidente?

Sr. Presidente (Mor Roig).— En la casa hay número. En el recinto faltan 9 señores diputados para que haya quórum.

Sr. Niembro.— Hago indicación de que se pase lista.

(1) Véase el texto de la sanción en el Apéndice.